



Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Grado en Relaciones Internacionales

Trabajo Fin de Grado

**¿CÓMO PODEMOS EXPLICAR DIFERENTES  
GRADOS DE PROCLIVIDAD SOCIAL HACIA  
EL APOYO AL LIBERALISMO  
ECONÓMICO?  
LOS CASOS COMPARADOS DE LA  
REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY**

Estudiante: Íñigo Jiménez Lloret

Director: Javier Martín Merchán

Madrid, junio de 2022

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Todo Estado presenta diferentes características sociales, culturales, políticas e históricas que contribuyen en gran medida a la formación de la opinión pública mayoritaria. La República de Chile y la República Oriental del Uruguay son dos países que convergen en muchas de las notas características mencionadas, pero que, simultáneamente, divergen en el marco de percepción social predominante hacia el liberalismo económico. El objeto de este trabajo se centra efectivamente en dilucidar qué factores nos pueden ayudar a entender la formación de la opinión pública de estos países, en concreto en lo que al apoyo de políticas de corte liberal en el ámbito económico concierne. De esta manera, haremos un recorrido histórico de las trayectorias políticas más recientes que han atravesado ambos países y trataremos de construir un marco explicativo que consiga ayudarnos a entender cómo se construye la proclividad de una sociedad hacia el rechazo o el apoyo de este paradigma político. Para ello, recurriremos a los resultados sobre opinión pública obtenidos de diferentes estudios y barómetros, en los que ahondaremos a lo largo del trabajo.

**Palabras clave:** Opinión pública, liberalismo económico, rol del Estado, trayectorias políticas, medios de comunicación.

## **ABSTRACT**

Every State presents different social, cultural, political and historical characteristics that contribute greatly to the formation of majority public opinion. The Republic of Chile and the Oriental Republic of Uruguay are two countries that converge in many of the aforementioned characteristics, but diverge in the predominant social perception framework towards economic liberalism. The purpose of this paper is to elucidate which factors can help us to understand the formation of public opinion in these countries, specifically as far as support for liberal policies in the economic sphere is concerned. In this way, we will make a historical review of the most recent political trajectories of both countries and try to construct an explanatory framework that can help us understand how a society's proclivity towards the rejection or support of this political paradigm is constructed. To do so, we will resort to the results on public opinion obtained from different studies and barometers, which we will delve into throughout the paper.

**Key words:** Public opinion, economic liberalism, role of the State, political trajectories, media.

## ÍNDICE DE CONTENIDO

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	2
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	4
<b>METODOLOGÍA</b> .....	6
<b>1 MARCO TEÓRICO</b> .....	8
1.1 La opinión pública según Zaller .....	8
1.2 La espiral del Silencio de Noelle Neumann .....	10
1.3 Teoría de la socialización .....	13
1.4 Teoría de la Fijación de la Agenda o Agenda Setting .....	16
<b>2 ANÁLISIS</b> .....	19
2.1 Introducción a los casos de Chile y Uruguay .....	19
2.2 La opinión pública en el caso de Uruguay .....	22
2.3 Variables independientes .....	25
2.4 Sistema de partidos .....	29
2.5 Transiciones democráticas .....	33
2.6 Los medios de comunicación .....	38
<b>CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN FINAL</b> .....	45

## INTRODUCCIÓN

La formación de la opinión pública constituye en muchas ocasiones un complejo proceso a través del cual las personas construyen un marco general de pensamiento, al cual posteriormente recurrirán con mayor o menos conciencia a la hora de articular manifestaciones en el debate político. Este proceso se encuentra frecuentemente impregnado de elementos de diferente naturaleza que concurren a la hora de moldear determinadas percepciones sociales hacia según que cuestiones políticas. Estos elementos, a los cuales a lo largo de este trabajo nos referiremos como variables, varían en función de las circunstancias sociales, familiares, económicas, políticas o incluso históricas que rodean a la persona en cuestión.

El liberalismo económico, que hunde sus raíces en el contexto de la Ilustración en Europa a finales del siglo XVIII, ha experimentado múltiples fases de desarrollo, constituyendo en la actualidad una de los modelos de desarrollo más arraigado en el mundo. Sin entrar en una explicación pormenorizada de lo que abarca el pensamiento liberal económico, podemos decir sucintamente que se trata de una doctrina que aboga por un modelo de desarrollo basado en el libre mercado, en el que prime la libertad del individuo y una intervención muy restringida del Estado en el sistema económico. A pesar de la popularidad que ha conseguido este pensamiento en muchos países, sigue habiendo muchos opositores. En efecto, hay sociedades que son más o menos proclives al apoyo de agendas políticas de carácter liberal en cuestiones económicas. En este contexto, el objeto de este trabajo se centra en entender las razones o variables que afectan a la opinión pública, en concreto a la percepción social hacia determinadas ideas que forman parte del paradigma liberal. En nuestro caso, vamos a ahondar en los casos de la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, a fin de dilucidar cual es la tendencia mayoritaria y que elementos pueden haber influido en dichas percepciones.

Existen múltiples teorías políticas a cerca de la formación de la opinión pública, en virtud de las cuales trataremos de explicar por qué existen percepciones sociales que divergen. En este trabajo, procederemos a un análisis comparativo de la opinión pública en Chile y Uruguay hacia el liberalismo económico. Este análisis trata de dar respuesta a las divergencias existentes en las respectivas percepciones públicas de Chile y Uruguay, partiendo de que ambos comparten un elenco considerable de similitudes geográficas, sociales, políticas e incluso históricas.

La explicación detrás de la diferente formación de la opinión pública constituye un estudio que no está exento de complejidad, ya que en muchas ocasiones no existe una explicación explícita o desconocemos factores personales o de diferente naturaleza que afecta al marco de pensamiento político de cada individuo. El objeto de este trabajo se centrará en acercarnos lo máximo posible a las implicaciones de las diferentes variables en la opinión pública de estos dos países, en aras de poder construir a la luz de estas pautas un marco explicativo que permita entender la mayor o menor propensión de una determinada sociedad hacia el pensamiento liberal económico. Por lo tanto, trataremos de entender por qué dos países que comparten un núcleo de similitudes socio-culturales y políticas presentan percepciones sociales divergentes hacia esta área de pensamiento.

## **METODOLOGÍA**

La discrepancia social a cerca de los diferentes modelos de desarrollo constituye una cuestión que se encuentra a la orden del día en el debate político actual. Por un lado, existe un consenso generalizado en muchos países que conciben el liberalismo económico como el sistema más idóneo para el crecimiento de una sociedad. Por otro lado, sigue habiendo países donde la sociedad muestra un alto grado de rechazo y desconfianza hacia el paradigma liberal, asociado frecuentemente con el desmantelamiento del Estado de bienestar y las políticas sociales. Por la trascendencia que posee esta cuestión en la actualidad, resulta muy interesante atender al elenco de factores y elementos que juegan un papel en la formación de la opinión pública hacia el liberalismo económico. El trabajo tiene por objeto desentrañar los factores que participan en el proceso cognitivo, en virtud del cual una persona tiende a ser a más o menos proclive a apoyar este modelo de desarrollo, así como las políticas que afloran del mismo. En concreto, he optado por coger los casos de Chile y Uruguay porque, tratándose de países que, a priori, muestran similitudes de diferente naturaleza social y política, vemos como las percepciones sociales divergen en gran medida en lo que respecta la pregunta que nos atañe. Por ello, el trabajo aspira a dilucidar que variables diferenciales pueden dar explicación a la varianza de resultados y extraer, al mismo tiempo, un marco argumentativo que nos ayude a entender las diferentes tendencias.

Para la realización de análisis comparativo de la opinión pública en estos países se ha hecho uso de diferentes fuentes tanto literarias como científicas. Por un lado, el trabajo se apoya en los resultados y análisis extraídos de diferentes estudios y artículos de revistas científicas, cuyo objeto de estudios versaba sobre la opinión pública en Chile y Uruguay en diferentes cuestiones políticas. En este marco de estudios, nos hemos centrado en la percepción del ciudadano hacia el rol del Estado, ahondando sobre todo en lo que se considera incluido dentro de las responsabilidades fundamentales del aparato estatal. A la luz de esta percepción, hemos podido observar si existía una visión más o menos estatista hacia el modelo de desarrollo. Por otro lado, la fuente de datos más empleada a lo largo del trabajo ha sido Latinobarómetro (2020), en virtud del cual hemos podido obtener resultados de encuestas muy variadas tanto de Chile como de Uruguay.

En cuanto a la calidad de los datos conviene hacer una serie de consideraciones. En lo que respecta los resultados de las encuestas publicadas por Latinobarómetro, hemos de apuntar que, a pesar de que la calidad de los datos sea excelente, hay cierta carencia

de preguntas más orientadas hacia el pensamiento económico en Latinoamérica. De esta manera, a pesar de ofrecer múltiples datos, a mi parecer falta un enfoque más pormenorizado que ahonde más en políticas concretas. Esta problemática enlaza con una cuestión a la que hacemos referencia a lo largo del trabajo, consistente en la falta de claridad en los términos definatorios de políticas liberales en el espectro económico. La falta de concreción a la hora de definir los elementos que realmente abarca este paradigma de desarrollo económico hace que no haya preguntas directamente dirigidas a la percepción social hacia el liberalismo económico. Por lo tanto, este hecho hace que la opinión pública hacia esta cuestión tenga que ser inferida de respuestas a preguntas que indirectamente pueden ofrecernos un marco de pensamiento general. En definitiva, los datos y el acceso a los mismos son excelentes, pero sería conveniente y especialmente interesante para la elaboración de este tipo de estudios una mayor profundización en el pensamiento económico de los ciudadanos.

Finalmente, en cuanto a la metodología seguida y siguiendo la línea descrita en este apartado apuntamos lo siguiente. En términos generales, la línea de base del trabajo reside en un análisis comparativo de dos países, Chile y Uruguay. Por un lado, se trata de apuntar, en una primera instancia, las similitudes que encontramos en ambos países en el aspecto social, cultural, político e histórico. Por otro lado, el análisis hace hincapié en las diferentes percepciones sociales que afloran en sus respectivas sociedades. El objeto del trabajo aspira a desgajar los elementos o variables clave que puedan dar explicación a la divergencia en estos resultados y, en definitiva, tratar de entender qué es lo que realmente dirige la proclividad de ambas sociedades hacia un mayor o menor apoyo hacia el liberalismo económico.

# 1 MARCO TEÓRICO

## 1.1 La opinión pública según Zaller

En su libro *La naturaleza y los orígenes de la opinión pública*, Zaller comparte su visión de lo que es la opinión pública, así como de la potencialidad de las encuestas para poder entender la formación de la misma. El planteamiento de Zaller parte de la premisa de que los ciudadanos no tienen una opinión específica para cada tema de debate político, entendiendo, de esta manera, que las encuestas no constituyen un mecanismo para averiguar las opiniones que tienen los ciudadanos sobre los mismos, sino que la opinión es algo que se va construyendo en el marco del propio ejercicio de encuestar al ciudadano. Esta falta de potencialidad de la que carecen las encuestas para desentrañar las opiniones de las personas en diferentes áreas, se muestra en las inconsistencias encontradas con frecuencia en el resultado final de las mismas. De acuerdo con esta percepción, todo ciudadano posee una serie de ideas preconcebidas, a las cuales va recurriendo en función del estímulo que recibe. Zaller define este tipo de predisposición mental como “ideas que se encuentran en la coronilla de la mente” (Cruz, 1996). En este contexto, las ideas más accesibles serían aquellas a las que los ciudadanos recurren para ir contestando a los temas de debate en cuestión.

En efecto, la paradoja de Zaller introduce un enfoque crítico en el marco de la metodología y potencialidad del modelo tradicional seguido por las encuestas populares, que puede servir como herramienta para entender la opinión pública sobre la implementación de políticas liberales en el seno de las políticas públicas. Esta percepción pesimista de las encuestas nos conduce a dilucidar hasta qué punto las deficiencias de su funcionamiento entrañan resultados inconsistentes, que impiden proyectar un reflejo suficientemente honesto de la opinión pública en una sociedad concreta. De esta manera, estaríamos hablando de diferentes temas de debate público sobre los que, de base, existe una carencia de conocimientos por parte de la población, como pueden ser, a título de ejemplo, los elementos que realmente constituyen una agenda política liberal en el plano económico. Por lo tanto, el objeto de investigación en este proceso de encuesta se encuentra constreñido, o bien por una latente falta de capacidad cognitiva debida, en gran parte, a la escasez de información, o bien por un conocimiento relativo construido a partir de información sesgada, parcial e inconsistente transmitida al individuo. La percepción pesimista de la potencialidad de esta herramienta en dichas cuestiones sugiere una falta



de legitimidad en determinados ámbitos, y en particular, en lo que la valoración de políticas liberales se refiere, una falta de formación de la propia sociedad sobre el debate en cuestión. En concordancia con este planteamiento, muchos autores hacen alusión a la falta de preparación de la que carece gran parte de la sociedad antes de enfrentarse a cuestiones de interés público. Esta falta de preparación puede no ser casualidad y, en concordancia con esta línea de pensamiento, probablemente sea fruto de un intento deliberado de las élites de mantener a gran parte de la sociedad al margen del pensamiento liberal y su base racional que lo sustenta. En efecto, esto se puede ver en el discurso político que, en ocasiones, trata de paliar la agenda liberal desde el plano emocional, apelando a los sentimientos y la pertenencia de clases, en vez de recurrir a un cuerpo argumentativo que desmonte muchos de los planteamientos encuadrados en el ideario liberal. En este sentido, existiría un interés por mantener un determinado nivel de desconocimiento social, el cual acaba jugando un papel importante en el comportamiento popular en las encuestas. (Zaller, 2014 V. O 1992)

En resumen, la idea parte del marco teórico presentado por Zaller, en el que en una primera instancia parece que el ciudadano no tiene una opinión formada para todas las cuestiones políticas y, por lo tanto, lo que hace es recurrir a las ideas preconcebidas que ya posee en su mente a la hora de enfrentarse a estas cuestiones. Dado que el alcance sobre el debate deliberativo de las implicaciones de la implementación política del ideario liberal se encuentra fuertemente limitado, esto impide que podamos ver una influencia mayoritaria de este pensamiento en las ideas preconcebidas del ciudadano. Es por ello, que la condición cognitiva del encuestado deja entrever una de las posibles explicaciones que pueden dar respuesta a un rechazo o incluso un desdén suficientemente representativo en determinados países o regiones a la introducción de políticas liberales.

Asimismo, Zaller hace hincapié en el rol de los medios de comunicación, los cuales, mediante la transmisión planificada de información, influyen en gran medida en la creación de un sesgo ideológico preponderante en una sociedad. El flujo constante de información de actualidad constituye de esta manera una de las herramientas que moldean muchas de las ideas generales de los ciudadanos, a las cuales, según Zaller, luego recurren para, en el curso de la encuesta, abordar diferentes respuestas a cuestiones políticas. Es decir, el monopolio de la información y los canales por los que ésta se difunde se convierten en pieza clave en la formación del ideario previo que todo ciudadano genera

en su mente, y que luego implícitamente da forma a la exteriorización final de la opinión del encuestado. Los medios de comunicación ejercen un paso previo en el que se abastece a un porcentaje amplio de la población una dirección de pensamiento, la cual posteriormente influirá en mayor o menor medida en la plasmación de la opinión individual. Los medios de masas no dejan de ser una fuente muy accesible y, por lo tanto, la que tiene más posibilidades de tener un mayor alcance social. (Cruz, 1996)

En el asunto que atañe este estudio, la reflexión sobre la representatividad de las encuestas y la resultante opinión pública general se enmarca sustancialmente en el debate sobre el nivel de formación ciudadana en lo que el pensamiento liberal respecta. En este contexto, resulta conveniente cuestionar el nivel de abstracción que poseen los ciudadanos a la hora de poder incluso discernir lo que conlleva la implantación por parte de los poderes políticos de una agenda liberal, así como sus implicaciones en sus respectivas vidas. Existe, por lo tanto, un significativo vacío de conocimiento que impide una valoración objetiva por parte del ciudadano medio. Por ello, resulta muy difícil que el ciudadano que carezca de formación previa pueda apoyar respuestas políticas, que desconoce de acuerdo con sus experiencias personales vividas y el mensaje general transmitido en el ámbito mediático. A pesar de que esta formación previa, la cual haría de complementarse con información sobre los demás modelos económicos, no asegure un cambio en el comportamiento de los ciudadanos a la hora de enfrentarse con los debates presentados en las encuestas, sí parece que llenarían un espacio nuevo en el ideario preconcebido de los ciudadanos, al cual en función del nivel de accesibilidad recurrirían de una manera u otra.

## **1.2 La espiral del Silencio de Noelle Neumann**

En segundo lugar, la espiral del silencio, obra de Noelle Neumann, estudia el impacto de las opiniones del entorno social en el individuo en el proceso de construir la suya propia. La capacidad del ser humano para percibir el ambiente social en el que se encuentra termina por influir en cierta medida el desarrollo de sus ideas. De acuerdo con este planteamiento respecto de la formación de la opinión pública, la autora determina que, ante la puesta en escena de determinados temas de controversia política en un contexto de desavenencia social, existe una opinión que se hace pública mientras que la voz discrepante queda relegada en un segundo plano y apartada del debate público. En consecuencia, hay un sector silencioso que se decanta por reservar sus juicios u opiniones, dado que perciben que éstas contradicen el pensamiento mayoritario. La renuncia de las

voces disidentes a refutar la opinión mayoritaria termina por reforzar la legitimidad de la misma, contribuyendo de esta manera a su consolidación y alcance. La decisión de permanecer en silencio viene precedida por el miedo o prevención al rechazo de la sociedad, propensa a desacreditar y desdeñar aquellas opiniones que se desmarcan de las ideas predominantes en un determinado entorno social. De esta manera, se crea una especie de consenso que repele todo tipo de opinión discordante con el discurso dominante. De acuerdo con la autora, la minoría silenciosa tiende a entrar en la denominada espiral del silencio, según la cual la opinión disidente tiende a una paulatina desaparición. En última instancia, este fenómeno termina por explicar la formación de la opinión pública en según qué cuestiones, como puede ser la percepción general sobre el papel del Estado en la esfera privada y su correspondiente capacidad de intervención, así como su rol en garantizar el bienestar social y paliar las disparidades socioeconómicas. De esta manera, se crean pautas generales que quedan fuertemente arraigadas en el espectro social general y que trazan las líneas de la opinión pública. En ocasiones, estos sesgos ideológicos no responden a posturas concretas respecto de diferentes cuestiones políticas, pero sí establecen un marco que dirige la construcción de la opinión en una dirección ideológica determinada de manera ad hoc.

En línea con esta teoría, Noelle-Neumann hace hincapié en la importancia que tiene la percepción del entorno social como elemento inherente a la convivencia en sociedad y la naturaleza humana, reflejada en la interacción social. De esta manera, la trascendencia del entorno social y la necesidad del ser humano de integrarse y no verse excluido por el consenso mayoritario conducen al silenciamiento de los puntos de vista disidentes, constituyendo éstos un sector minoritario y, por lo tanto, menos popular. Así, Noelle-Neumann entiende que la vida del individuo en sociedad se reduce a un proceso de sometimiento ideológico de la minoría a la mayoría. No obstante, la autora sostiene que existen excepciones, entre las cuales se encuentran grupos minoritarios, que en escasas situaciones no temen ser excluidas socialmente y sacan adelante la defensa de sus ideas discordantes a fin de propiciar cambios en la opinión pública, dotando a ésta de un carácter más dinámica y flexible. (Sopena, 2008)

En lo que a este trabajo concierne, resulta conveniente analizar, asimismo, el impacto de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública mayoritaria y el rechazo generalizado hacia los disidentes. En efecto, los medios de comunicación crean un clima de opinión y transmiten una imagen de la vida social como supuesto fiel

reflejo de la sociedad. A través de este canal de alcance social se difunden muchos mensajes, algunos de los cuales pasan a entrar en el debate político o clima de opinión y, por ende, a contribuir sutilmente a la formación de la opinión pública.

En el marco de la espiral del silencio de Noelle-Neumann podríamos encuadrar posibles explicaciones a las ideas destinadas a tratar de demonizar la propuesta de agendas políticas liberales. En este sentido, muchos medios de comunicación tienden a atemorizar a parte de la sociedad con la idea de que la implantación de un liberalismo sin control conllevaría la drástica reducción o incluso desaparición del aparato intervencionista estatal, en detrimento de las bases que afianzan sus competencias para combatir la desigualdad y asegurar ciertos niveles de bienestar general. De esta concepción antagonista y, en cierta medida, poco fidedigna del paradigma liberal, confundiendo el mismo con una concepción libertaria encaminada a la cuasi desaparición del Estado, nace una desconfianza y un miedo generalizado, especialmente latente entre las clases sociales más modestas, hacia su implementación. Siguiendo esta estrategia discursiva se trata de desacreditar el modelo liberal reduciendo el debate de fondo a ideas superficiales que terminan por polarizar y, por ende, enfrentar a la sociedad, la cual en última instancia tiende a ver con mayor desconfianza discursos nuevos que versen sobre un funcionamiento estatal diferente y a sentirse más protegidos permaneciendo fieles al modelo tradicional imperante. Desde el momento en que se propaga y consolida la idea de que el modelo liberal única y exclusivamente beneficiaría a las personas y empresas económicamente más poderosas se produce un clivaje social, en el cual la postura que clama mayor popularidad es la que presenta una oposición frontal a la llegada del diablo liberal en defensa de la igualdad y el bienestar general. La espiral del silencio hace hincapié en el rol de la televisión y su correspondiente capacidad de controlar los focos de interés de la audiencia y su correspondiente capacidad de percepción selectiva (Sopena, 2008). Asimismo, partiendo de la consonancia irreal a la que Noelle-Neumann hace alusión, existe cierto grado de convergencia y homogeneidad en la información, como resultado de influencias recíprocas y fines comunes compartidos entre los diferentes medios de comunicación. En muchos países, la significativa dependencia financiera de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales de diferentes sesgos políticos, procedente del caudal público, hace que pueda existir un interés general en transmitir una idea contraria a la reducción del Estado asociada al gasto público y, por extensión, a las subvenciones de las que estos se nutren de manera sustancial. De esta

manera, podríamos decir que en numerosos países existe cierta aquiescencia o convergencia ideológica entre medios de comunicación progresistas de izquierda y conservadores de derecha en prevalecer el statu quo estatal, en virtud del cual se puede asegurar la supervivencia económica y la continuidad de los mismos (Dittus, 2005).

De esta manera, en el contexto actual de las democracias pluralistas y con libertad de información, la diversidad ideológica se convierte en algo residual, existiendo así un sentido general, así como un espectro de ideas comunes inamovibles, dando lugar a la acumulación de medios y periodistas. Se crearía así una idea dominante en torno a la importancia del tamaño del Estado y, por lo tanto, contrario a muchas políticas liberales de índole económica que buscan precisamente recortar el gasto público por razones de eficiencia económica y de similar índole. El contexto de la percepción del ambiente social y el correlativo miedo del ser humano a caer en aislamiento social como resultado de defender ideas contrarias a la opinión dominante constituirían algunas de las claves finales para consolidar una idea a través de este complejo proceso comunicativo expuesto por Noelle-Neumann. Por lo tanto, siguiendo las pautas de Noelle-Neumann, los medios de comunicación consiguen aminorar la capacidad de percepción selectiva del individuo cuando existe consonancia entre la opinión propia expresada y el clima de opinión dominante, así como con el silencio de la opinión discordante, introduciendo así mecanismos que hacen que las personas tiendan a adherirse a las opiniones mayoritarias (Dittus, 2005). Así, el individuo sería más propenso a expresar su opinión cuando ésta se ve respaldada por el clima de opinión política, mientras que los que mantienen posturas disonantes, por el contrario, tienden a permanecer en silencio.

### **1.3 Teoría de la socialización**

En tercer lugar, la teoría de la socialización presenta un enfoque sobre la formación de la opinión pública centrado en la influencia que ejerce el entorno social en el que el individuo se desarrolla. En una primera aproximación, esta teoría entiende que la socialización constituye un proceso, en virtud del cual el individuo se va integrando en la sociedad aprendiendo un conjunto de valores, normas y reglas que le permiten la propia supervivencia y el desarrollo de su existencia dentro del grupo y sociedad que ha nacido (Roiz, 1987).

Esta teoría analiza la influencia de los diferentes agentes socializadores en el comportamiento político del individuo, haciendo hincapié en el colegio, la familia, el grupo de pares, así como los medios de comunicación, y como la influencia de estos repercute en la participación política y en la formación de opinión pública. La socialización política puede ser abordada desde tres dimensiones diferentes, es decir, se puede estudiar como proceso, como producto y como mecanismo social (Rivas, 2003). En relación con el tema que estamos tratando, resulta apropiado abordar esta teoría como mecanismo social y aplicarla a la formación de la opinión pública dentro de un determinado contexto social. Respecto a esta línea de análisis, se entiende como mecanismo social la forma en la que se cimienta una determinada cultura política en una sociedad, así como su perpetuación a través de varias generaciones. En este sentido, abordaríamos el escenario en el que una parte mayoritaria de la sociedad forma los pilares de su pensamiento político inicial sobre las bases de un sistema de Estado determinado, creando así un marco teórico del cual será muy difícil escapar. De esta manera, se estudiaría cómo el rechazo de un sector significativo al pensamiento liberal podría venir precedido por las diferentes etapas del proceso de socialización del individuo, durante la cual se van estructurando una serie de ideas que no convergen con el esquema liberal que estamos tratando en este estudio.

En definitiva, la teoría de la socialización nos ayuda a ver cómo los paradigmas sobre el funcionamiento de una determinada sociedad, así como los valores que impregnan a la misma, acaban por afectar la formación de la opinión pública a través de la participación política de los individuos que se encuentran en dicha sociedad. De esta manera, el individuo se encuentra ante una situación en la que tiene que pasar a través de un proceso de integración. En este sentido, el individuo no solo ha de intentar integrarse dentro de su entorno social, sino que acaba por participar en determinados grupos sociales. En términos generales, tenemos que entender que el individuo desarrolla su propia personalidad en el seno de la sociedad. En consecuencia, al tener que interactuar con diferentes agentes sociales e integrarse en determinados grupos sociales, previamente caracterizados por una serie de bases y pilares ideológicos que lo sustentan, termina por crear una tendencia ideológica en el individuo. En efecto, el individuo no se puede entender al margen de su sociedad y, por lo tanto, de los principios, valores, ideas que la caracterizan. Éste, además de integrarse en determinadas colectividades, termina por reflejar los valores y principios adquiridos en su comportamiento político (Rivas, 2003).

De acuerdo con este planteamiento, hemos de dilucidar la medida en la que la teoría de la socialización podría servirnos en el estudio del rechazo o la aceptación por parte de una sociedad hacia el liberalismo económico. De esta manera, se podría ver cómo la integración en una sociedad, en la que los valores e ideas no convergen con el ideario liberal, puede conducir a que el individuo en el proceso de integrarse en el mismo acepte esos valores e ideales para sí mismo y, finalmente, los incorpore a la hora de formar su propia opinión en cuestiones de políticas públicas y participe en consonancia en el sistema.

Partiendo de la premisa de que estuviésemos ante sociedades en las que predomina un sentimiento contrario al ideario liberal, el individuo terminaría por incorporar esos principios y valores contrarios a la implementación de políticas liberales como resultado del complejo proceso de integración social. En virtud de este análisis, no solo hemos de discernir hasta qué punto una sociedad puede influir en la opinión política de un individuo, sino que también podemos concluir que en muchas ocasiones el individuo termina por formar una opinión, fruto de un proceso en el que inconscientemente ha adquirido e incorporado ideas y valores que determinaran hasta cierto punto su aquiescencia o rechazo político a través de su integración en una colectividad o sociedad. Es decir, el individuo no se detiene a analizar de manera pormenorizada y aséptica, desde el punto de vista de los prejuicios ideológicos, los posibles beneficios y defectos de una agenda política liberal en el orden económico, sino que su aceptación o rechazo responde a los principios y valores adquiridos durante el proceso de integración en una sociedad o en un colectivo que directamente rechaza este tipo de políticas en base a un marco general asimilado en el paulatino proceso de su desarrollo personal en la sociedad. Por ello, podemos hacer hincapié en el hecho de que el individuo no valora por su cuenta y en virtud de su propio entendimiento la viabilidad o las diferentes opciones u oportunidades que puede ofrecer un liberalismo económico, sino que realmente lo que hace es dejarse llevar por su aprendizaje durante ese proceso de integración en una sociedad, el cual, no obstante, no tiene por qué tener menos legitimidad, pero puede ayudarnos a entender determinadas respuestas políticas de la sociedad. Este análisis nos puede servir en el estudio de la opinión pública de cara al rechazo o la aceptación de políticas liberales, en el sentido de que estudiar el funcionamiento tradicional o histórico de una sociedad y las ideas que preponderan en el seno de la misma, termina por darnos las claves para entender por qué se forman determinadas opiniones públicas generalizadas.

#### **1.4 Teoría de la Fijación de la Agenda o Agenda Setting**

La idea principal que caracteriza esta teoría ahonda en el rol de los medios de comunicación, en la medida en que se convierte en factor sustancial para comprender la formación de la opinión pública. Siguiendo las líneas principales de esta teoría, partimos de la idea de que los ciudadanos forman su opinión pública a partir del grado de importancia dotada por los medios de comunicación a determinados temas de actualidad política. Al hilo de esta teoría, hemos de dilucidar hasta qué punto los medios de comunicación pueden influir en la opinión de las personas con respecto a la implementación de políticas liberales en el ámbito económico a través de la estructura que adopta la difusión de la información. El poder que ostentan los medios de comunicación como poseedores y gestores de la información constituiría así un medio de disuasión ideológica soterrada, a tenor de la cual se iría construyendo un perfil de ciudadano concreto con un marco e ideario dirigido a bien aceptar o, por el contrario, desdeñar un tipo de políticas públicas frente a otras. Los medios de comunicación han adquirido especial relevancia hoy en día, especialmente gracias a los diferentes medios y diversas plataformas que permiten su amplia difusión en masa. Al igual que ocurre con las noticias en general, los medios de comunicación han conseguido tener especial influencia sobre la sociedad. Los instrumentos digitales que ofrece el ámbito de las redes sociales se han convertido asimismo en una ampliación de su alcance mediático. Por lo tanto, siguiendo la idea principal de la “Teoría de la Agenda Setting” los medios de comunicación tratan de influir en la formación pública a través de las noticias, prestando especial atención en la forma estratégica que subyace en los métodos de transmisión mediática. De esta manera, la estructura de las noticias diarias reviste un formato orientado a tener un impacto social en determinadas cuestiones sociopolíticas. En efecto, la mayoría de los medios de comunicación llevan a cabo una exposición minuciosamente selectiva a fin de influir en el marco interpretativo mental de la audiencia. Los métodos de influencia pueden adoptar diferentes estrategias, entre las cuales puede destacarse el orden en el que se dan las noticias, el tiempo al que el programa informativo dedica a cada asunto o la reiteración de la noticia a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Por lo tanto, no se tratan de fuentes de información asépticas desde el punto de vista ideológico, sino que reviste un sesgo dirigido a un sentido político determinado (Rubio, 2009).



La manera en la que las agendas mediáticas se estructuran busca, finalmente, ir construyendo una percepción o perspectiva general en la sociedad, que les predisponga a tentar hacia una dirección política u otra en el futuro. Se trata pues de un proceso en el que la audiencia va amoldando su mentalidad y percepción, en la mayoría de las ocasiones inconscientemente, en el marco de una serie de ideales y valores implícitamente asimilados a través del consumo de la retransmisión diaria de noticias. Por ello, McCombs afirma que la agenda de los medios de comunicación pasa a constituir la agenda pública, por lo que los temas más determinantes y la percepción socialmente aceptada serán aquellos transmitidos por los medios de comunicación. El sentido final de la denominada fijación de la agenda reside en la manera en la que funcionan los medios de comunicación en la agenda pública y social, la cual trasciende la mera transmisión de información. Simultáneamente, de acuerdo con Shaw la trascendencia que consiguen adquirir los medios de comunicación termina por crear una suerte de dependencia cognitiva, en virtud de la cual el espectador no sólo cede al orden del día preestablecido de manera selectiva, sino que muestra su aquiescencia respecto del orden de importancia y de prioridad. No obstante, esta línea de pensamiento se diferencia de la teoría hipodérmica, en la manera en la que los medios de comunicación despliegan sus efectos en sus receptores. En este sentido, la teoría de la fijación de la agenda incide eminentemente en la influencia de éstos en la construcción de las imágenes que los seres humanos tienen de la realidad social a través de la información. Esta construcción del imaginario social, finalmente, repercute en la formación de opiniones sobre políticas públicas. En este marco, “Cohen puntualiza que la prensa no consigue decir a la gente lo que tiene que pensar, pero sí es capaz de decir a los propios lectores sobre qué temas tienen que pensar” (Rubio, 2009). En la actualidad, el vertiginoso auge de la digitalización ha concedido mayor espacio y, por ende, mayor relevancia social a los medios de comunicación, los cuales han encontrado una expansión significativa de su alcance mediático a través de los nuevos canales de transmisión de información. El acceso a la información ha hecho que la gran mayoría de los conocimientos de las personas a cerca de cuestiones políticas provengan de los medios y no de la experiencia real, personal y directa. Este hecho convierte inevitablemente al receptor en un ser vulnerable y manipulable. Paradójicamente, la tecnología a pesar de haber incrementado las fuentes de conocimiento del ser humano, al mismo tiempo ha conseguido ejercer un control cognitivo que en ocasiones resulta que se convierte en una herramienta de adoctrinamiento ideológico. Asimismo, McCombs y Shaw hablan de un segundo nivel de la “Agenda Setting”, en virtud del cual más allá de la selección parcial

de las noticias, los medios de comunicación y, en concreto, el periodista recurre a un lenguaje cargado de tendencias ideológicas, a lo que estos autores denominan atributos. Dicha selección de un lenguaje concreto trasciende la idea de que los medios de comunicación buscan decir al receptor sobre que ha de pensar, para alcanzar la perspectiva valorativa del mismo, estableciendo una serie de estándares que servirán de marco para evaluar cuestiones políticas (McCombs & Shaw, 1972).

Esta concepción parte, por lo tanto, de la idea de que ni la información ni la opinión pública son neutrales. La cuestión que interesa reside eminentemente en los efectos e influencia que ejercen los medios de comunicación en la construcción del imaginario social de la audiencia, las instituciones públicas y finalmente en el sistema social. Se trata pues de desgarrar el proceso mediante el cual los mecanismos informadores de estos medios se articulan estratégicamente para construir una línea de pensamiento general y, por extensión, un tipo de sociedad, en línea con la teoría de construcción social propuesta por Berger y Luckmann (2006), en la cual se hace hincapié en el alcance de los efectos sociales de los medios (Berger & Luckmann, 2010). En definitiva, esta teoría podría ser de utilidad en el estudio en cuestión en lo relativo al efecto que tiene la prensa en decir al ciudadano sobre que tiene que pensar (Cohen, 1963). En este sentido, también puede jugar un papel importante la desinformación, la cual indirectamente constituye parte de la fijación de la agenda. En la mayoría de las ocasiones, la opinión pública mayoritaria omite un proceso de deliberación en la adopción de una postura política debido, en gran parte, a la falta de información accesible que sirva para contrastar diferentes opiniones. De nuevo, esta teoría serviría para poner de relieve las ideas erróneas preconcebidas que adoptan muchos ciudadanos sobre el liberalismo en el marco de políticas de orden económico. Se trata pues de analizar hasta qué punto las ventanas al mundo exterior de las que hablaban McCombs y Shaw inciden en el conocimiento del ser humano y, por ende, en la percepción que éste forma en relación con el liberalismo económico. Resulta muy interesante el estudio del lenguaje, al cual hoy en día se le presta mucha atención, ya que es utilizado de manera recurrente para exacerbar diferentes sensibilidades políticas, sociales e incluso culturales. En el mundo de la información actual hay numerosos términos políticos como el estado de bienestar o la socialdemocracia, que son empleados de manera arbitraria, y que se cargan de connotaciones positivas o negativas según convenga al color ideológico al que sea afín el medio en cuestión. Este estudio sobre el empleo del lenguaje podría enlazar con la idea

de hegemonía y en particular, el concepto de discurso hegemónico acuñado por Ernesto Laclau. En este contexto, el discurso hegemónico es capaz de delimitar las líneas del debate político, haciendo por extensión que todo lo que no entre se considere deslegitimado. Dado, que el discurso hegemónico consigue establecer una frontera que excluye otras alternativas al identificarlas como irracionales, ilegítimas, inmorales o incoherentes, puede resultar interesante su impacto en la percepción social sobre la idea proyectada del liberalismo económico.

En efecto, los medios de comunicación no solo repercuten la sociedad a través de la selección de la información y la correspondiente graduación de importancia, sino que establece parámetros de evaluación. De acuerdo con esta teoría, hemos de distinguir entre el “priming” (fijación o preparación) y el “framing” (encuadre). Mientras el primero se centra en la selección de determinados aspectos informativos y su presentación, el segundo aporta un marco interpretativo, que, estableciendo las bases para la creación de un punto de vista dominante, será en definitiva el elemento que termine por originar un tipo de opinión pública. (Rubio, 2009) Finalmente, se trata de un proceso comunicativo, mediante el cual se establece una vinculación entre el emisor, el receptor y el mensaje, que crea un marco de percepción social a largo plazo, encaminado a dirigir la construcción de la imagen de la realidad social que sobre la que los individuos basan sustancialmente la formación de su opinión. Teniendo en cuenta las características de esta teoría, resultaría conveniente analizar hasta qué punto es posible que la estructuración de los informativos, tanto en lo que respecta el contenido y su difusión, tienen un impacto en la percepción social hacia la implementación de políticas económicas de corte liberal. En efecto, hoy en día la inabarcable dimensión que ha adquirido la información constituye una suerte y, al mismo tiempo, un peligro para el ser humano, dado que requiere cierto grado de nivel cognitivo y de discernimiento para poder utilizar dicha información adecuadamente.

## **2 ANÁLISIS**

### **2.1 Introducción a los casos de Chile y Uruguay**

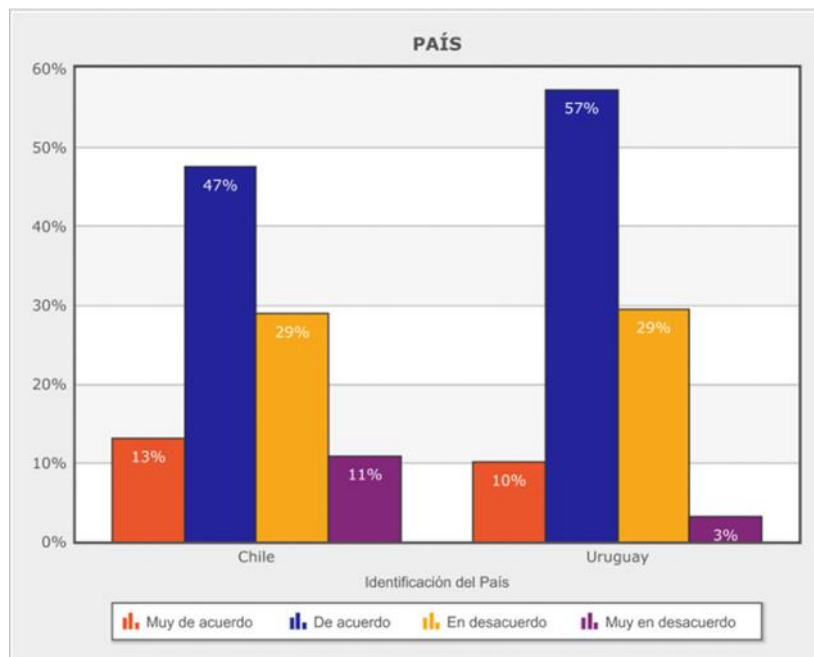
Tanto la República de Chile como la República Oriental del Uruguay constituyen dos de los Estados con índices de crecimiento económico más altos en Latinoamérica, encontrándose sus respectivas economías entre las más sólidas de la región. En términos muy generales, podemos decir que ambos países han mantenido diferentes estructuras

liberales en política económica que, no obstante, se han articulado en contextos de gobiernos muy dispares en términos ideológicos. Por un lado, Chile resulta un ejemplo más evidente de modelo económico liberal, ateniendo a la agenda política implementada durante los últimos cuarenta años. En efecto, Chile es considerado como uno de los “laboratorios del neoliberalismo”, donde, como se desarrollará más adelante en este trabajo, se concedió la disposición sobre la estructura económica chilena a un grupo de economistas, los denominados “Chicago Boys”, permitiéndoles “poner en práctica su particular visión de la sociedad, posibilitando con ello, la implementación de políticas económicas y sociales con escasas restricciones institucionales políticas y sociales” (Stormansan, 2011). Las políticas de liberalización llevadas a cabo a partir de la llegada de Pinochet estaban dirigidas a enfrentar el modelo keynesiano asociado a un papel activo del Estado y tenían por objeto “revertir los procesos de nacionalización en diversos sectores de la industria, y así promover una economía de mercado” (Gutiérrez, 2019). La política chilena ha dado continuidad a este modelo económico, el cual ha ido desmantelando la magnitud del aparato estatal, hasta el punto en el que el proceso de privatización ha alcanzado la provisión de servicios esenciales como el agua, la luz, el gas, etc. Dejando a un lado las implicaciones sociales que este tipo de políticas han tenido en gran parte de la sociedad, afectando consecuentemente en la percepción social hacia estas políticas, resulta bastante evidente percibir el caso de Chile como ejemplo de economía liberal en la actualidad (Barría, 2019).

Por otro lado, Uruguay presenta una estructura mixta o “híbrida”, en la que se han mantenido diversas instituciones liberales durante las últimas dos décadas a pesar de que el país haya sido gobernado por partidos de izquierda, cuya base ideológica a priori se aparta del ideario liberal económico. En consecuencia, los sucesivos gobiernos de izquierda en Uruguay han optado por un sistema cimentado en torno a la idea de un Estado intervencionista tanto en lo social como en lo económico. Históricamente ambos países presentan diferencias y similitudes, las cuales nos van a permitir entender cómo, a pesar de converger en cuestiones sustanciales del debate de modelos económicos, han llegado a resultados tanto distintos como similares en diferentes parcelas económicas.

A pesar de que resulte extremadamente genérico en lo que el análisis de nuestro estudio atañe, hemos de partir de la percepción social hacia el modelo liberal económico.

Figura 1: La economía de mercado como único sistema de desarrollo del país



Fuente: Latinobarómetro (2020)

De acuerdo con lo expuesto en este gráfico extraído de Latinobarómetro (2020), vemos cómo, en ambos países, existe una mayoría social que sostiene que “la economía de mercado constituye el único sistema con el que el país puede ser desarrollado”. En efecto, partimos de la base de que, por economía de mercado, entendemos un sistema de libre mercado, que, por lo tanto, enlaza con el pensamiento liberal económico en su vertiente más genérica. Es evidente que dicha afirmación carece de cierto rigor, dado que la idea general sobre la economía de mercado no casa necesariamente con muchas de las políticas de liberalismo económico, siendo, de hecho, perfectamente compatible con los modelos socialdemócratas o incluso progresistas, en los que predomina un alto grado de estatismo. No obstante, constituye un punto de partida para desgajar los elementos que sustentan la opinión pública en estos dos países de estudio, en el que desde un primer acercamiento se apoya mayoritariamente la idea general de un sistema de libre mercado como modelo necesario para el crecimiento del país.

El análisis en el caso de Chile constituye un supuesto de especial interés, considerando que se han ido desarrollando políticas liberales en el ámbito comercial y financiero durante los últimos cuarenta años, especialmente tras el final de la dictadura de Pinochet.

En el caso de Uruguay, la implementación de políticas liberales no ha sido tan evidente como en Chile. No obstante, la preservación de determinadas instituciones liberales mantenidas por la izquierda durante los últimos años no pasa desapercibida y constituye un factor interesante en relación con el estudio que nos atañe.

A fin de analizar la opinión pública en estos países, aspiramos a entender los factores en común, así como aquellos propios únicamente de cada país, de modo que podamos entender el impacto de la implementación de estas políticas, así como el trasfondo sociocultural y mediático. Con respecto al poder de los medios de comunicación en esta área ahondaremos al final del análisis, con el objeto de ver en qué grado son capaces de predisponer a su audiencia sobre la aplicación de este tipo de políticas, ya sea en un sentido favorable o desfavorable.

## **2.2 La opinión pública en el caso de Uruguay**

En esta parte del trabajo vamos a ahondar en una serie de percepciones sociales sobre, fundamentalmente orientadas hacia la visión que sostiene la sociedad uruguaya con respecto al rol del Estado en la economía. A fin de poder inferir un marco de opinión pública en Uruguay a cerca del liberalismo económico procederemos a analizar los resultados publicados en el artículo “Rol del Gobierno: ¿Qué opinan los uruguayos?”, artículo publicado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de la Republica en 2008 (Ferre, Melgar, & Rossi, 2008). El artículo en cuestión nos proporciona una serie de datos, que procederemos a analizar y que nos van a permitir exponer una imagen más amplia sobre la opinión pública en Uruguay hacia el liberalismo económico. En concreto, el artículo hace hincapié en la percepción social hacia el papel que ha de desempeñar el Estado. En efecto, de la concepción social relativa a las funciones y responsabilidades que han de ser entendidas como inherentes al rol del Estado podremos extraer el grado de estatismo existente en Uruguay.

En relación con este estudio, podemos observar que existen datos un tanto contradictorios. Es decir, por un lado, veremos cómo hay percepciones sociales que

sostienen la necesidad de reducir el gasto del caudal público, postura que se puede encuadrar dentro del paradigma liberal, ya que dicha demanda podría llevar aparejada una reducción del Estado. No obstante, veremos cómo, por otro lado, hay datos que aseguran que gran parte de la sociedad uruguaya entiende que no se destinan los suficientes recursos públicos a áreas como la sanidad o la educación. Esta última percepción podría contradecir la primera afirmación relativa a los recortes del gasto público y, en consecuencia, abogar por un papel del Estado más activo e intervencionista. A continuación, procederemos a precisar estos resultados y el análisis que se puede inferir de los mismos.

A este respecto hemos de intentar dar explicación a los siguientes resultados. Mientras, por un lado, cerca del 81% de la población sostiene la necesidad de reducir el gasto público, por otro lado, dentro del elenco de responsabilidades del Estado, en torno al 80% de los encuestados sostiene que el gobierno ha de garantizar el empleo para aquellas personas que busquen uno (Ferre, Melgar, & Rossi, 2008). Asimismo, más del 90% de los participantes en la encuesta incluyen el control de precios de mercado como una de las responsabilidades del gobierno. A la luz de estos resultados, resulta indiscutible que tienen lugar percepciones recíprocamente contradictorias. Mientras la reducción del gasto público se enmarca dentro de la idea de un Estado más reducido y, en consecuencia, menos intervencionista, la creación de empleo público, así como el control sobre los mercados, constituyen elementos consistentes con el desempeño de un rol más activo del Estado, percepción contraria al organigrama estatal liberal. Asimismo, la encuesta enseña cómo la pregunta acerca del intervencionismo del Estado en la economía en términos generales muestra un resultado muy simétrico, por lo que no se puede inferir una visión mayoritaria hacia una u otra percepción (Ferre, Melgar, & Rossi, 2008) .

En este sentido, vemos cómo, a pesar de que Uruguay presente instituciones liberales apoyadas por su población en su mayoría, existe una percepción generalizada diferente de la que presenta la población chilena con respecto al rol del Estado, indicador muy relevante a la hora de determinar la opinión pública en relación con los paradigmas del liberalismo económico. Dicha percepción generalizada reside eminentemente en la percepción del Estado como el agente principal en la regulación del sistema económico. A la luz de los resultados expuestos, podemos ver como en Uruguay predomina la idea de un Estado muy activo e intervencionista. De esta manera, existe un estándar más alto que en Chile con respecto a lo que la sociedad espera del rol estatal. Como hemos podido

observar hay un porcentaje mayoritario de los uruguayos encuestados que sostienen un elenco de responsabilidades sociales por parte del Estado muy amplio. La concepción del Estado como garante de empleo, como hemos apuntado en el párrafo anterior, constituye un indicador muy claro de la mentalidad estatista e incluso podríamos describir como “clientelar” que predomina en el país (Selligson, 2008). Para garantizar estas salvaguardas sociales el sistema ha de apoyarse sobre la nacionalización de muchos sectores de la economía, a fin de poder proporcionar estas garantías. En el caso de Chile, vemos como el propio grado de privatización consolidado durante los últimos años se aleja necesariamente de esta posibilidad, ya que el Estado chileno es mucho menos omnipresente y, por extensión, tiene menos capacidad para asegurar un nivel tan alto de apoyo social en el marco del estado de bienestar de la sociedad.

Otras áreas en las que conviene hacer hincapié son las concernientes al gasto público y a los impuestos. De nuevo, la tendencia mayoritaria es favorable a subir los gastos destinados a sectores como la educación, la sanidad o las pensiones, lo cual encaja con la percepción preponderante que defiende un Estado activo, dato que resulta asimismo contradictorio con la opinión mayoritaria anteriormente expuesta, que defiende una reducción del gasto público (Ferre, Melgar, & Rossi, 2008). No obstante, es verdad que esta última conclusión se podría matizar, en el sentido de que una reducción del gasto público puede ser compatible con la destinación de mayores recursos económicos a sectores sociales esenciales, como pueden ser la educación o la sanidad, siempre y cuando venga acompañado de una reducción del gasto en otros sectores de la actividad estatal. No obstante, en un primer acercamiento, hay razones suficientes para entender que, a priori, la demanda de mayor apoyo presupuestario a los sectores referidos va a suponer un incremento en el dispendio del caudal público. Por lo tanto, encontramos que la tendencia general oscila hacia la idea de un papel bastante protagonista del Estado, por lo que no se sostendría la idea de un Estado pequeño y eficiente, propia de la agenda que defiende el liberalismo económico. Por otro lado, encontramos cómo cerca de un 80%, tanto de los grupos pertenecientes a las rentas medias como a las bajas, sostienen que los impuestos son muy altos (Ferre, Melgar & Rossi, 2008). De nuevo, se trata de una percepción que podría entenderse contraria al paradigma estatista, en virtud del cual la aportación fiscal ciudadana al sostenimiento del sistema y, en especial de los servicios públicos, sustenta en gran medida la financiación de los presupuestos del Estado. Los impuestos pasan a integrar el caudal público, a través del cual se erige el papel del Estado



como garante del estado de bienestar social. No obstante, estos datos debemos analizarlos con cautela, ya que, probablemente, las clases que defienden una bajada de impuestos sostengan que esta haya de llevarse a cabo en detrimento de las clases de ingresos más altos, dentro del marco tributario redistributivo. Esta percepción no aparece recogida en los resultados del estudio expuesto, pero estimo conveniente tenerla en consideración para abordar los datos con mayor cautela y rigor.

### **2.3 Variables independientes**

Una vez expuesta la opinión mayoritaria hacia diferentes cuestiones que nos acercan a la percepción social preponderante hacia al liberalismo económico en Uruguay, hemos de dilucidar qué tipo de variables independientes nos pueden servir para entender las diferencias suscitadas en lo que la opinión pública mayoritaria de ambos países respecta.

Por un lado, en el caso de Chile, debemos partir de un contexto histórico relativamente reciente, el cual sienta las bases de las políticas liberales implementadas durante los últimos treinta años. Conviene señalar que, actualmente, Chile se encuentra en un periodo de cambio en el contexto de una reforma constitucional recientemente aprobada. Dicha reforma ha tenido como objeto principal derogar muchas de las bases del modelo político introducido por Pinochet, las cuales han regido la política chilena durante las últimas cuatro décadas. No obstante, resulta aconsejable dejar a un lado momentáneamente este proceso de reforma, sin perjuicio de que sucintamente abordemos los elementos más trascendentes de esta cuestión en las consideraciones finales a fin de tratar el devenir político de uno de los países objeto de estudio.

En efecto, Chile es considerado por muchos autores como uno de los primeros experimentos del neoliberalismo, pensamiento que comienza a extenderse con fuerza en la década de los ochenta. En lo que respecta los primeros años del régimen de Pinochet, lo cierto es que el país atravesó una época de gran dificultad económica, llegando a alcanzar la inflación casi los 300 puntos. Es decir, había una precariedad extrema, llegando un momento de crisis total. Es en este momento cuando la junta militar de Pinochet se ve obligada a recurrir a la ayuda de un grupo de economistas formados en la Universidad católica de Chile, pero muy influidos por dos economistas americanos

mundialmente conocidos, Milton Friedman y Arnold Harberger, conocidos como los “Chicago Boys” (Gutiérrez, 2019).

A raíz de la influencia y el arraigo del pensamiento neoliberal, se llevó a cabo una transformación inmediata de la economía chilena, caracterizada durante los primeros años de reforma por el proceso de privatización de gran parte del sector público, dirigida eminentemente a paliar el impacto de la inflación. En este proceso de reducción del gasto público, se promovió incluso la modificación completa del sistema de pensiones público por uno capitalizado, uno de los pocos que existen en el mundo y férreamente criticado en la actualidad (Livacic, 2018). Asimismo, en línea con el objeto de reducir el déficit estatal, se cortaron muchas de las ayudas destinadas a las clases más pobres, así como otros subsidios anteriormente destinados a sendos servicios públicos. En cuanto a los efectos de la implementación de estas políticas, conviene resaltar que, a corto plazo, se perdieron numerosos puestos de trabajo, eminentemente procedentes de empresas poco eficientes auspiciadas por el Estado. No obstante, la década de los años 80 fue muy buena en términos económicos, mostrando índices de crecimiento sin precedentes (Livacic, 2018).

En 1988, las presiones internacionales obligan a Pinochet a convocar un referéndum, en el cual se sometió la continuidad del régimen al escrutinio social. Finalmente, el voto social mayoritario se inclinó por una reforma democrática, lo que condujo al final del régimen de Pinochet en 1988. A raíz del resultado de este referéndum, comienza la denominada reforma democrática en el país. A pesar de este giro democrático, el impacto y el legado de estas políticas de corte liberal se vieron reflejados en las políticas llevadas a cabo en los años posteriores. De esta manera, podemos observar como todos los gobiernos que se sucedieron en los años 90 mantuvieron gran parte del aparato institucional diseñado por los “Chicago Boys”. Una de las piezas clave para entender la continuidad de este marco general político es la inmutabilidad de la constitución aprobada durante el régimen en 1980. De hecho, la Constitución de 1980 es considerada como la piedra angular del sistema, en el que se consagraron muchas de los principios que sustentaban el modelo neoliberal.

Con respecto a la situación económica actual del país, hemos de destacar que la economía chilena se encuentra hoy en día entre las 20 más libres del mundo (Index of Economic Freedom, 2022). Asimismo, constituye uno de los Estados con más acuerdos de libre comercio en Latinoamérica, mantiene un sistema de tipos impositivos medios, y

su gobierno es pionero en políticas de lucha contra la corrupción y transparencia, a pesar de haber estado inmerso en numerosos casos de corrupción durante los últimos años. Hoy, los chilenos son más ricos que los argentinos, dato que, teniendo en cuenta la diferencia en recursos naturales, debida sustancialmente a circunstancias demográficas y geográficas, llama considerablemente la atención. En cuanto a indicadores de desarrollo económico conviene hacer las siguientes consideraciones. La tasa de pobreza rondaba en 2018 el 6%, aunque ésta se ha disparado hasta alcanzar casi el 15% como consecuencia de la crisis del Covid-19 (Salas, Santander, & Precht, 2020). Lo mismo ocurre con otros indicadores, como los relativos a la esperanza de vida, nivel de alfabetización, renta per cápita, etc., cuyos índices se presentan considerablemente por encima de la media en la región latinoamericana (Rojas & Charles-Leija, 2022).

No obstante, el sistema económico reviste una serie de deficiencias, las cuales se han hecho especialmente notorias durante los últimos años, cuya cristalización ha ido paulatinamente incrementando el descontento social y la necesidad de grandes cambios. Por ello, frecuentemente se hace alusión a que los indicadores de desarrollo económico no se corresponden necesariamente con una mejora del bienestar (Rojas & Charles-Leija, 2022). En efecto, a pesar de encontrarse entre las veinte economías más libres del mundo, Chile es uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica, es decir existen enormes disparidades socioeconómicas entre las diferentes clases sociales (Gutiérrez, 2019). A este respecto, podemos coger como referencia el coeficiente Gini, que se centra en estudiar las tasas de desigualdad de ingresos en países concretos. De acuerdo con este índice, vemos como Chile destaca por presentar un coeficiente considerablemente alto que ronda un 44,4% (Índice de Gini Banco Mundial, 2022). Asimismo, si comparásemos a Chile con los Estados miembros de la Unión Europea, veríamos cómo se encontraría entre los países más pobres de la misma. En definitiva, incluimos estas valoraciones a fin de proyectar una imagen del país y del resultado de su modelo económico lo más objetiva y fidedigna posible, resaltando tanto éxitos como deficiencias de un sistema que en muchos aspectos representa el modelo liberal económico.

En cuanto a Uruguay, encontramos un desarrollo político distinto durante las últimas tres décadas. Hemos de destacar que Uruguay es uno de los países más ricos de la región, presentando el índice más alto de renta per cápita de Latinoamérica, y contando con un índice de libertad económica medio-alto, situado entre las 35 economías más libres del mundo (Index of Economic Freedom, 2022). El crecimiento económico que ha venido

experimentando, especialmente durante los últimos 15 años, ha de complementarse con los avances conseguidos en materia social. Es por ello, que Uruguay es considerado el país latinoamericano con mejores servicios sociales y pionero en avances legislativos, destacando la aprobación del matrimonio homosexual y la legalización de la venta de cannabis para fines recreativos, ambas en el año 2013 .

Resulta conveniente para nuestro estudio en cuestión señalar que, durante los años 80, se introdujeron diversas instituciones liberales en el modelo económico del país. Entre las mismas, hemos de destacar la creación de las denominadas “zonas francas”. Estas “zonas francas” siguen existiendo en la actualidad y constituyen áreas en las que se exonera el pago de impuestos, quedando dicha exoneración sujeta a que los puestos de trabajo de las mismas estén destinados en un 75% a la población local. La crisis de 2002 constituyó un punto de inflexión para Uruguay, entendiendo sus gobernantes que debían abandonar la interdependencia fraguada e intensificada con Argentina y cambiar de socios comerciales en el marco de una mayor apertura y liberalización comercial, siendo China hoy en día el principal socio comercial del país. En 2005 comienza una nueva etapa política, dominada por el Frente Amplio de Uruguay, partido de centro izquierda liderado por Tabaré Vázquez, alternándose en dos ocasiones con Mujica. Durante los años gobernados por el Frente Amplio, el país lleva a cabo un viraje ideológico dirigido lógicamente hacia la izquierda, sustancialmente en materia de políticas sociales, sin perjuicio de preservar determinadas estructuras cimentadas durante la década de la transición democrática en los ochenta. Entre estas instituciones, destaca la preservación de las anteriormente mencionadas “zonas francas”, cuya continuidad ha reportado grandes beneficios económicos para el país. En concreto, las características de estos espacios económicos especiales han conducido a que se establezcan industrias que se han visto atraídas por estas condiciones fiscales (Lanzaro, 2013). Asimismo, se trata de empleos cualificados, que, por extensión, llevan aparejadas remuneraciones altas, por lo que desincentiva la emigración a otros países de trabajadores cualificados uruguayos, un fenómeno que sucede con recurrencia en muchos países vecinos de la región.

De esta manera, Uruguay presenta una economía más diversificada que la chilena, ya que dejó de depender de la explotación de materias primas, como la carne, para potenciar la producción de productos de valor añadido, que, reportan más beneficios. A pesar de haber tenido lugar una constante alternancia en la presidencia del país por el Frente Amplio, la figura del ministro de Economía, Danilo Astori, ha permanecido

prácticamente intacta durante los últimos 15 años, siendo ministro de esta cartera excepto durante el periodo comprendido entre 2010 y 2015, en el que desempeñó el cargo de vicepresidente de la República. De esta manera, una de las claves para entender el modelo económico seguido en Uruguay reside eminentemente en la figura de Astori. Uno de los datos sobre los que haremos hincapié a lo largo de este análisis reside en el gasto público en Uruguay, destacado, entre otras cosas, por uno de los países con mayor porcentaje de funcionarios públicos de Latinoamérica (Bertino & García Repetto, 2008).

## **2.4 Sistema de partidos**

Las diferencias en la configuración del sistema de partidos constituyen una de las variables de carácter político de mayor interés a fin de entender cómo su arraigo influye en las percepciones sociales predominantes.

En cuanto al sistema de partidos chileno, precedente al régimen autoritario de Augusto Pinochet, Chile se caracterizaba por tener un sistema multipartidista e ideológicamente polarizado. En términos generales, podemos decir que se asemejaba al sistema de partidos predominante en los países de Europa occidental. En este sentido, las diferentes sensibilidades (conservadores, centro e izquierda) contaban con canales de representación considerablemente sofisticados y un alto grado de institucionalización, permitiéndoles participar en el debate político en igualdad de condiciones. A la luz de este contexto partidista, podríamos decir que dicha estructura de organización de partidos políticos dividía la sociedad en tres partes, las cuales quedaban deliberadamente alienadas en torno a una base organizacional. Estas bases de los partidos impregnadas por una estructura ideológica concreta, combinadas con la consolidación de redes clientelares y de patronaje, hacían posible la centralización de los partidos. En este sentido, observamos que existía un alto grado de sofisticación e institucionalización partidista, la cual contaba con estructuras de ideas y relaciones sociales muy definidas. La composición y estructuración ideológica de este sistema de partidos inducía que los diferentes clivajes sociales en Chile se encontrasen claramente delimitados y movilizados. En cuanto a los diferentes gobiernos previos al golpe de Estado en 1973, conviene apuntar que existió una constante alternancia de poder durante los cuarenta años precedentes. No obstante, el giro electoral en 1970 y el viraje de la izquierda resultante, simpatizante y cercana al marxismo, constituyó un hito sin precedentes que marcaría el devenir de la política chilena. En efecto, la izquierda que llega al poder en 1970 de la mano de Salvador Allende

aspira a llevar a cabo una transición del sistema estatal al socialismo. Las pretensiones del gobierno de la Unidad Popular se habían intensificado con respecto a los representantes pasados de la izquierda chilena, enfrentándose de esta manera frontalmente contra los intereses de las élites tanto políticas como sociales y alterando, por lo tanto, el statu quo político social que había preponderado en el país durante las últimas cuatro décadas. Aunque no afecte directamente a la pregunta que nos atañe en este trabajo, el análisis de la trayectoria del sistema de partidos y los acontecimientos políticos más recientes nos pueden ayudar a entender como se ha ido formando la opinión pública, en este caso en Chile. El impacto social que desencadenan las políticas de Allende y que terminan con el golpe de Estado en 1973 rompe con el equilibrio existente en Chile. El golpe de Estado no deja de tener un trasfondo social, impulsado por un miedo o prevención al socialismo y sus implicaciones en el desarrollo del país. Teniendo en cuenta que el golpe de Pinochet contaba con un respaldo muy amplio, podemos deducir que este sentir era compartido por gran parte de la sociedad. Esta experiencia política deja un legado en la sociedad chilena, en virtud del cual se transmite un marco de pensamiento contrario a las ideas que sustentan el socialismo. En especial, se extiende una animadversión creada por las élites tradicionales hacia el proceso de nacionalización que caracterizó la breve andadura por el poder de Salvador Allende. Podríamos inferir que se empieza a fraguar una postura política propensa a evitar la sobredimensión del aparato estatal, percepción que, sin duda, se acerca a las bases que sustentan el liberalismo económico. Por lo tanto, el recorrido histórico juega un papel muy importante en el análisis de la opinión pública hacia este pensamiento.

Por otro lado, el sistema de partidos en Uruguay divergía en diferentes aspectos con respecto al chileno. En primera instancia, el sistema era de carácter bipartidista, y contaba con un alto nivel de fragmentación política. Este sistema estaba compuesto por dos partidos tradicionales, considerados como “policlasistas o catch all”, es decir que agrupaban votantes de diferentes clases sociales, lo que fomentaba menos cohesión en el seno de los partidos y, por ende, mayor fragmentación (Alcántara & Luna, 2004). Al igual que en el caso de Chile, los partidos formaban su electorado a raíz de redes clientelares, elemento muy característico y tendente en los países de Latinoamérica. A diferencia del sistema de partidos chileno, el bipartidismo uruguayo carecía de un alto grado de centralización (Buquet & Piñeiro, 2011). Asimismo, éstos seguían una tradición de cooperación, en virtud de la cual disponían conjuntamente de recursos estatales, los cuales

luego eran empleados como instrumentos clientelares “distribuidos entre sus correspondientes bases de electores” (Alcántara & Luna, 2004) . El contexto de estancamiento económico y las pobres previsiones de recuperación durante los años 60 comenzó a poner el sistema bipartidista tradicional en tela de juicio, viéndose éste paulatinamente desafiado por diversos movimientos de izquierda. Esta movilización procedente de la izquierda política concluyó consolidándose a nivel institucional con la creación en 1971 del Frente Amplio uruguayo (en adelante, FA), partido que aglutinaba diferentes alas de la izquierda y que consiguió “un 18% de las adhesiones electorales en las elecciones de ese año” (Alcántara & Luna, 2004). Sin embargo, el FA se quedó lejos del 80% del voto electoral, acaparado aún por ambos partidos tradicionales. No obstante, la movilización de la izquierda no solo condujo a la posterior creación del FA, sino que instigó el surgimiento de diversos movimientos de izquierda reivindicativa de una reforma íntegra y socialista del sistema político. La polarización consagrada a partir de la expansión de estos movimientos, sumado a la precaria situación económica, condujeron al debilitamiento del sistema de partidos, mermado por un alto grado de polarización ideológica. De esta manera, y en el marco de este escenario de inestabilidad política tuvo lugar el golpe de Estado de 1973, instaurándose así la dictadura antes de que la izquierda más radical y revolucionaria llegara al poder. El hecho de que esto último no ocurriese y, por extensión, no se llegase a implementar medidas de reforma socialista, insta a pensar que puede constituir un elemento a tener en cuenta a la hora de analizar la concepción social mayoritaria respecto del modelo de desarrollo socialista y, por lo tanto, del estatismo frente al reduccionismo del aparato estatal defendido por los liberales.

En este sentido, vemos como la experiencia política puede influir en las percepciones sociales. Es evidente que no es lo mismo juzgar el marco teórico de una determinada línea de pensamiento que ver cómo se articula su implementación práctica, así como la manera en la que moldea la sociedad. En este caso, los chilenos vivieron de primera mano, aunque durante un breve periodo de tiempo, los efectos de las políticas socialistas de Allende. Con independencia del juicio de estas políticas, no resulta desacertado intuir que un sector de la sociedad, sobre todo las élites sociales tradicionales, se viesen amenazadas por este tipo de políticas y que el miedo y la proclividad de rechazarlas se haya transmitido a las siguientes generaciones, creando un marco general propenso a apoyar un sistema político en el que el Estado no posea un rol tan activo. Por otro lado, si bien es cierto que la experiencia socialista puede haber afectado las bases de

la opinión pública de según qué sectores de la sociedad chilena, lo mismo o incluso con mayor razón se podría deducir de la experiencia autoritaria durante el régimen de Pinochet. Debemos tener en cuenta que, a parte de la represión sociopolítica sufrida por miles de personas, se llevaron a cabo privatizaciones y un desmantelamiento del aparato institucional estatal que dejó a muchas personas en una situación de extrema precariedad y desprotección.

Como hemos apuntado al final del apartado sobre el recorrido histórico del sistema de partidos en Chile, resulta importante ver como vinculamos las implicaciones de los cambios políticos que experimentan ambos países con la formación de la opinión pública. En efecto, vemos como se dan contextos de polarización política muy semejantes en ambos países previos a los respectivos golpes de Estado, propiciados eminentemente por el auge de los partidos y movimientos sociales de la izquierda. No obstante, mientras que en Chile llega a gobernar la izquierda de la mano de Salvador Allende, en Uruguay se instaura el régimen autoritario antes que los líderes de izquierda pudiesen llegar al poder. De esta manera, podemos apuntar que el impacto de la experiencia chilena, tanto con el socialismo como con el consiguiente proceso de nacionalización que experimentó su economía, puede implicar un mayor impacto social y un rechazo más pronunciado al socialismo. A la luz de este elemento diferencial, podríamos inferir que el impacto de las políticas socialistas en Chile ha podido tener a lo largo del tiempo una mayor implicación en la formación de una opinión pública mayoritaria más propensa a aceptar el liberalismo económico. Asimismo, atendiendo a los contextos sociales y políticos previos a ambos golpes de Estado, podríamos inferir que éstos no vienen impulsados por el auge de la izquierda en la misma medida. Por un lado, en el caso de Chile sí resulta más evidente la correlación entre el alto grado de desavenencia ideológica y desconfianza hacia el gobierno de Allende y el golpe de Estado. Por otro lado, en el caso de Uruguay partimos de un sistema de partidos mucho menos sofisticado y más fragmentado, que junto con un contexto de inestabilidad económica empujan al colapso del sistema. Esto último no quita que el auge de la izquierda fomente mayor polarización y enfrentamiento en la sociedad, pero no acapara la misma trascendencia que en el caso de Chile, y por lo tanto no guarda tanta correlación directa con el golpe de Estado. Todo esto hace que las experiencias políticas vividas en ambos países durante la época señalada, hayan tenido un impacto diferente en la opinión pública, a pesar de presentar muchas similitudes.



## 2.5 Transiciones democráticas

Una vez introducidas las diferencias de los sistemas de partidos previos a ambas épocas autoritarias tanto en Chile como Uruguay, hemos de atender a los diferentes cauces de transición o retorno a la democracia trazados en ambos países, en los que el régimen autoritario no contaba con el mismo grado de aceptación y legitimidad social.

Antes de estudiar los diferentes procesos de transición en Chile y Uruguay, conviene poner de relieve las convergencias y divergencias que presentaban ambos regímenes. En primer lugar, ambas dictaduras se caracterizaban por ser regímenes burocráticos-autoritarios, los cuales destacan por estar encaminados a reestablecer un determinado orden social y económico en detrimento de los mecanismos democráticos y en respuesta a los movimientos sociales que alteraban dicho orden (Livacic, 2018). Por lo tanto, hablamos de dos dictaduras militares que tenían por objeto restaurar un determinado orden sociopolítico a través del empleo de la represión política y militar. Sin embargo, vemos como, con independencia de las similitudes de índole formal, ambos regímenes divergían en varios aspectos. Por un lado, el régimen instaurado por Augusto Pinochet se enmarcaba dentro de un intento de “refundación nacional”, a través de la cual se perseguía llevar a cabo una transformación económica, social y política íntegra del país, al frente de la cual destacaba la figura del dictador. En este caso, muchos de los cambios conseguidos por Pinochet han quedado fuertemente arraigados en la estructura política chilena, siendo la preservación de la Constitución de 1980 hasta 2022 la máxima expresión de su legado político. Por otro lado, el régimen autoritario en Uruguay no consiguió que los cambios suscitados durante el mismo trascendieran el tiempo que duró el régimen, siendo por ello considerado como una suerte de “paréntesis autoritario”, cuyo impacto en la sociedad uruguaya ha sido mucha más limitado. En efecto, tras el final del régimen se retomaron muchas de las estructuras políticas tradicionales precedentes. “Esta divergencia puede ser explicada a partir de la percepción de riesgo experimentada por las elites y algunos sectores sociales chilenos durante el gobierno de la Unidad Popular, lo que otorgó a Pinochet mayores bases de apoyo, legitimidad y autonomía” (Alcántara & Luna, 2004). En efecto, como apuntamos anteriormente, las diferencias en el apoyo y la consiguiente legitimidad otorgada a ambos regímenes pueden dar respuesta al diferente grado de trascendencia de los cambios estructurales realizados durante su vigencia, siendo el impacto en Chile mucho más perceptible que en Uruguay. Asimismo, el crecimiento económico que experimentó Chile durante la década de los años 80 proporcionó mayor

crédito y apoyo a las políticas neoliberales introducidas por Pinochet. Dicho crecimiento es considerado como clave en la posterior continuidad de este marco político, ya que por muchos autores se trata de un periodo tildado de exitoso (Alcántara & Luna, 2004). En el caso de Uruguay, a pesar de preservar determinadas instituciones de carácter liberalizador en términos comerciales y financieros, restauró el estatismo precedente, así como las correlativas políticas de carácter social asociadas a la idea de estatismo (Alcántara & Luna, 2004). La dictadura en Uruguay no había obtenido, por lo tanto, tanto crédito como la chilena.

En cuanto al proceso de transición debemos hacer las siguientes apreciaciones, determinantes para el estudio que nos atañe. En efecto, al igual que hemos puesto de manifiesto las diferencias de ambos regímenes, observamos que el proceso de transición fue distinto en ambos países. En primer lugar, podemos decir que el elemento diferencial residió en el marco constitucional. Mientras que, en el caso de la transición uruguaya, la clase política que la lideró optó por volver a la Constitución de 1966, en el caso de Chile, se mantuvo el texto constitucional aprobado durante la dictadura, el cual, además de revestir ciertos elementos que podrían considerarse como autoritarios, se asegura de modificar el funcionamiento del sistema de partidos precedente y contempla salvaguardas institucionales en aras de garantizar la continuidad del modelo económico “neoliberal”. Asimismo, retornando a la cuestión relativa al diferente grado de apoyo social, en el caso chileno el legado autoritario se asegura tener figuras afines al régimen en la clase política post-dictatorial, los cuales se integraban mayoritariamente en los partidos integrantes de “Alianza por Chile”.

Como ya apuntamos anteriormente, las implicaciones y el grado de trascendencia de las políticas liberales introducidas durante ambos regímenes dependió en gran medida de la legitimidad y consiguiente apoyo social que recibieron. En el caso de Chile, vemos cómo el impulso económico experimentado en la década de los 80 fue fundamental para que el nuevo modelo económico de mercado se pudiese consolidar y fuese percibido como la mejor opción de desarrollo y crecimiento nacional por parte del electorado. En este contexto, dejando a un lado la represión social y política, la sociedad chilena entendió que el modelo seguido durante los últimos años les había funcionado. De esta manera, se consolidó cierto consenso social entre los diferentes partidos en torno al modelo económico implantado durante el régimen. En el marco de este modelo, los propios partidos de centro e izquierda, agrupados en “la Concertación”, renunciaron a desafiar

frontalmente el modelo de desarrollo pro-mercado y sus pretensiones se circunscribieron durante muchos años a la introducción marginal de ciertas mejoras, especialmente en el ámbito de políticas sociales focalizadas, entendidas como “aquellas que se proponen beneficiar únicamente a sectores poblacionales que se hallan por debajo de cierto umbral de pobreza o riesgo social” (Raczynski, 1995). De esta manera, se trataba de introducir medidas sociales dirigidas a grupos sociales particulares, sosteniendo que la focalización es capaz de “asegurar el uso más eficiente de los recursos disponibles —y escasos— y en este sentido las políticas sociales focalizadas son más efectivas, sobre todo en países con mayores niveles de desigualdad (Ochman, 2014). En línea con este autor, el grado de eficiencia de este tipo de políticas, conlleva un menor coste fiscal y, por extensión, una mayor proclividad social hacia el apoyo de políticas sociales (Ochman, 2014). Este hecho conlleva lógicamente la disminución de los costos fiscales, y por ende menor rechazo a las políticas sociales del Estado, haciéndolas sustentables a largo plazo”. No obstante, existen numerosas discrepancias a cerca de la viabilidad y eficiencia de la focalización, sosteniendo que “existe evidencia empírica de que los programas focalizados son menos efectivos en la disminución de la pobreza que los sistemas universalistas”. En términos generales, la focalización ha sido ampliamente criticada por dejar de lado la importancia del entorno comunitario, y por ser propenso a estigmatizar socialmente a los grupos de beneficiados (Raczynski, 1995).

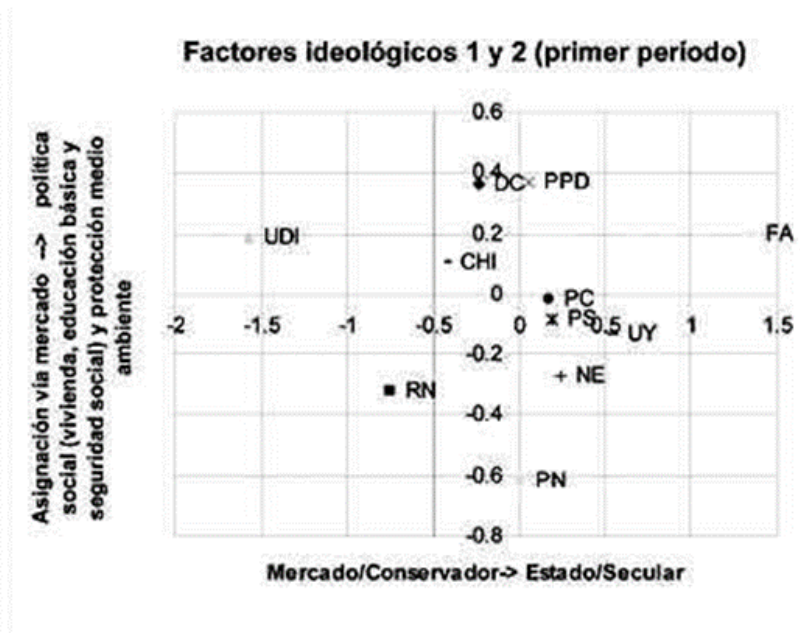
Por otro lado, la transición uruguaya se desarrolló en un contexto diferente. En el caso de Uruguay, el país experimentó una situación de estancamiento económico tras el final del régimen, a excepción de un breve periodo de crecimiento entre 1994 y 1998. Durante la década de los 90, puede destacarse que Uruguay presentaba estándares de distribución de ingresos moderadamente equitativos y fue capaz de reducir considerablemente la pobreza. Si bien es cierto que, en el marco de los primeros años post-dictatoriales, la reanudación de la democracia en Uruguay se encontró con la herencia de un aparato estatal de enorme dimensión, aparejado de un gasto del caudal público desmedido. En este contexto, Uruguay recibió numerosas presiones desde la comunidad internacional con el objeto de reducir su déficit público en detrimento de recortes en el estado de bienestar fuertemente arraigado en el país. A pesar de las presiones externas, el FA se ha resistido a los intentos de implantar reformas neoliberales contrarias al estatismo consolidado. A raíz de este contexto político, el sistema de partidos ha ido experimentando mayor polarización, enfrentándose así el sector reformista, en el

seno del cual se defiende la introducción de políticas económicas liberales, al polo que se sitúa en la izquierda de la barra política, espectro ideológico en el que se aboga por la preservación del modelo “batllista” (Alcántara & Luna, 2004). En virtud de este último modelo, se defiende un rol activo e intervencionista del Estado, articulador éste último de políticas sociales y regulador del mercado. En términos generales, una porción mayoritaria de la sociedad uruguaya se ha ido alineando a la matriz batllista en detrimento de la consolidación de los movimientos neoliberales en el país. De esta manera, se ha creado cierto consenso social en cuyo marco se ha ido forjando una predisposición popular de rechazo al liberalismo económico, haciendo que incluso los partidos de derechas se vean desincentivados a abogar por dichas políticas de manera directa. La consolidación de este marco de pensamiento enlaza con la teoría de la espiral del silencio, en virtud del cual los ciudadanos y, en este particular caso los partidos reformistas, aceptan el consenso social en torno a un modelo de desarrollo predilecto en ese contexto social y reprime parte de su discurso a fin de evitar su descrédito electoral y su consiguiente marginación del debate político. De esta manera, hablamos de un marco y los cimientos de un discurso hegemónico, a raíz del cual quedan sustancialmente deslegitimados aquellas posturas que vislumbren la posibilidad de cambiar de modelo. En este sentido, vemos como en el caso de Uruguay podríamos hablar de un rechazo hacia la implantación de una agenda económica liberal, cuya raíz se halla eminentemente en la consolidación de un modelo de desarrollo opuesto. Dicho modelo se ha ido consolidando tanto política como socialmente a través de una trayectoria democrática que ha insistido en fortalecer su arraigo.

De esta manera, la continuidad de un sistema gobernado por el estatismo genera habitualidad y dependencia de la sociedad, la cual se acostumbra a la existencia de un Estado con rasgos paternalistas, garante de unos mínimos estándares de bienestar social y, consecuentemente, desarrolla inconscientemente una fuerte reticencia hacia un modelo en el que el Estado pueda perder dicho protagonismo. Podríamos hablar de un miedo social a la emancipación del individuo del Estado, cuya presencia y papel activo han asegurado un nivel de bienestar general. “Parece claro que aquellos líderes que impulsan dichas reformas (neoliberales) son consecuentemente castigados en términos electorales y enfrentan, por tanto, fuertes incentivos para evitarlas o diferirlas siempre que ello sea posible” (Alcántara & Luna, 2004).

Una vez expuestas las diferentes trayectorias democráticas tras el final de ambos regímenes autoritarios, podemos decir que el sistema de partidos resultante en ambos procesos de transición democráticos nos proporciona una serie de pautas. Éstas nos pueden ayudar a determinar las razones que hacen a la sociedad de uno y otro país más o menos propensas a apoyar o rechazar el liberalismo económico. Conviene, adicionalmente, poner de manifiesto la ideología partidaria preponderante en torno a esta cuestión durante las legislaturas en Chile entre 1993 y 1997 y de Uruguay entre 1995 y el año 2000, a fin de cerrar el marco ideológico que presentan los partidos más representativos en ambos países (Alcántara & Luna, 2004).

Figura 2



(Alcántara & Luna, 2004)

En el gráfico expuesto podemos ver como los diferentes partidos de Chile y Uruguay se ubican ideológicamente en torno a la dicotomía que enfrenta dos modelos de desarrollo, por un lado, aquel en el que el Estado ocupa una posición preeminente y central y, por otro lado, el modelo de mercado. De esta manera, vemos que hay una tendencia general por parte de los partidos chilenos de ubicarse en posiciones más proclives al modelo pro-mercado y conservador en lo moral y religioso, mientras que los partidos uruguayos se encuentran en el polo opuesto, siendo más proclives al modelo de desarrollo estatista, caracterizado por un rol central del Estado secular. Si bien es cierto que en este estudio nos centramos en la opinión pública y no en las bases ideológicas de los partidos, la ubicación ideológica de los mismos en torno a esta cuestión central del debate sobre el liberalismo económico resulta muy significativa a la hora de determinar el sentir general de los ciudadanos de ambos países, cuyos canales de representación política, ubicados ideológicamente en este gráfico, constituyen su canal de representación más importante. Por lo tanto, la identificación partidaria con ambos modelos, pese a no existir una correlación exacta con la percepción social y la opinión pública, nos proporciona indicios sobre el sentir general preponderante en cada país.

## **2.6 Los medios de comunicación**

Una de las variables más relevantes a la hora de estudiar la opinión pública acerca de cuestiones políticas, incluyendo la percepción hacia el liberalismo económico, reside en el papel desempeñado por los medios de comunicación en estos dos países. En cuanto al alcance y la credibilidad que irradia el poder mediático en ambos países, podemos apreciar resultados sustancialmente simétricos. En lo que el alcance difusivo concierne, podemos ver que en ambos países hay un porcentaje muy alto de la sociedad que presta atención al contenido de los mismos, siendo en Uruguay un 81.3% y en Chile un 72.4% de la población que escucha o lee atentamente las noticias (Navia, Osorio, & Valenzuela, 2013). Por otro lado, aún más relevante es el alto índice que presentan ambos casos con respecto al contenido difundido por los medios de comunicación, oscilando en ambos países entre un 66% y un 70% de los encuestados, quienes afirman confiar en el contenido transmitido por los medios (Focás & Kessler, 2015). Como analizamos previamente en el marco teórico, los medios de comunicación constituyen un mecanismo muy fuerte de influencia en la creación de opinión pública y estos datos avalan su trascendencia, la cual

habrá de ser tenida en cuenta a la hora de entender la percepción social acerca del liberalismo económico. En términos generales, podemos decir que hay un índice bastante alto de confianza en Latinoamérica. “El promedio de confianza es alto en toda la región y los medios se ubican entre las instituciones que concitan más aprobación en un subcontinente escéptico de sus instituciones; es decir, a pesar de que los medios están en el centro del debate, perdura una importante confianza en ellos” (Focás & Kessler, 2015). Resulta muy interesante tener en cuenta la brecha que existe entre la confianza del ciudadano a los medios de comunicación y a las instituciones, dato que habría de tener en consideración en futuros trabajos y que deja entrever la precariedad de sistema político que muestra indicios de colapso. En este sentido, hemos de apuntar que 83% de los chilenos y 66% de los uruguayos encuestados afirman tener “poca o ninguna confianza hacia el sistema de partidos (Latinobarómetro, 2020).

En términos generales, en el caso de Chile, podemos decir que históricamente los medios de comunicación chilenos han estado más vinculados a la derecha (Couso, 2011). En el caso de El Mercurio, la época de la dictadura de Pinochet fue clave para la consolidación de su influencia mediática, convirtiéndose éste en el medio de comunicación más afín al régimen (Dermota, 2002). Junto a este hecho, hemos de tener en cuenta que muchos de los medios afines a los partidos de izquierda fueron objeto de represión política durante el régimen autoritario de Augusto Pinochet. El debilitamiento sufrido durante los años de dictadura mermó su difícil recuperación y reincorporación al mercado mediático durante la transición, quedándose considerablemente detrás de El Mercurio (Mönckeberg, 2011). Es por ello, que la influencia de El Mercurio es muy relevante para entender el desarrollo de la política del país durante los últimos 40 años, considerado por muchos autores como el medio de comunicación más importante de la historia del país (Soto, 2003).

En lo que su influencia en la percepción social hacia el liberalismo económico respecta, resultaría desacertado ignorar su contribución al marco de pensamiento chileno predominante durante muchos años. Debemos tener en cuenta que el golpe de Estado fue apoyado directa y abiertamente por el entonces propietario del diario, Agustín Edwards, quién mostró un gran interés en desestabilizar al gobierno encabezado por Salvador Allende y proporcionó diversos medios a fin de facilitar la llegada de Pinochet al poder (Mönckeberg, 2011). En consonancia con este apoyo inicial, el diario manifestó, asimismo, su apoyo a las ideas promulgadas por los Chicago Boys, quienes articularon la

implementación del neoliberalismo en Chile. De este contexto podemos deducir que el diario llevó a cabo esfuerzos mediáticos por defender y hacer publicidad a las ideas liberales que sustentaban el modelo económico introducido durante el régimen, que además experimentaría continuidad durante la transición democrática. Partiendo del hecho de que muchos autores sostienen que el consumo de los medios de comunicación ha tenido históricamente importantes implicaciones en las percepciones políticas de los electores chilenos, así como en la predisposición de algunos grupos sociales a la hora de votar, parece lógico deducir que la preeminencia de El Mercurio ha podido tener impacto en la opinión pública en lo que liberalismo económico respecta (Schuster, 2010). “Desde el retorno de la democracia, el sistema de medios se subordinó a las dinámicas de mercado, reproduciendo los procesos de privatización e internacionalización” (Navia, Osorio, & Valenzuela, 2013). De esta manera, podemos decir que El Mercurio ha sido capaz de influir en la percepción de la sociedad chilena hacia las políticas económicas liberales durante muchos años, como consecuencia del poder de influencia que ha sido capaz de poseer el medio durante mucho tiempo. No obstante, es cierto que este análisis toma un rumbo distinto a raíz de las protestas de 2019, momento a partir del cual parece primar un sentimiento reivindicativo contrario a las políticas que han caracterizado la trayectoria política chilena durante los últimos cuarenta años.

A fin de seguir profundizando en el análisis del rol desempeñado por los medios de comunicación en la formación de la opinión pública de Chile y Uruguay, conviene hacer una serie de consideraciones hacia los medios con más alcance mediático en ambos países, que son “El País” en Uruguay y “El Mercurio Online” también conocido como “EMOL” en Chile. En este apartado interesa saber la tendencia ideológica que caracteriza a cada medio de comunicación, así como el grado de correlación que existe entre los intereses de los periodistas y sus correlativas audiencias. En primera instancia, hemos de apuntar que ambos nacieron a manos de las élites más conservadoras e influyentes de Chile y Uruguay a principios del siglo XX y pertenecen al Grupo de Diarios de América, agrupación de los diarios más influyentes en la región latinoamericana (Giuliano, 2017). En su origen, estos diarios respondían a las necesidades y pretensiones económicas de las familias y élites más poderosas de ambos países. Actualmente, ambos diarios comparten una misma matriz ideológica, caracterizada por ser próxima al conservadurismo y al liberalismo económico. El estudio a partir del cual vamos a conducir esta parte del análisis trata de dilucidar en qué medida logran estos medios tan influyentes establecer la agenda



política de la sociedad, o si, por el contrario, hay una discordancia con respecto a las cuestiones que interesan a la audiencia. Esto resulta importante, ya que a pesar de que se traten de medios muy influyentes de ideología conservadora, es menos probable que estos influyan en la opinión pública si no dotan el mismo grado de importancia a las diferentes cuestiones de contenido mediático que la audiencia. Una vez determinemos la posible brecha de intereses entre el medio y su audiencia, podemos dilucidar con mayor precisión hasta qué punto estos medios de comunicación influyen en la formación de la opinión pública, así como en las “imágenes que los ciudadanos poseen del mundo” (Lippmann, 1993).

Tras haber hecho hincapié en los diferentes sistemas de partidos, así como las trayectorias políticas y de transición seguidas por ambos países vamos a observar el grado de correlación que existe entre los intereses de los medios y de la audiencia. A pesar de haber avistado considerables diferencias en este apartado, encontramos también un curso de la historia muy similar, el cual nos podría conducir a pensar que habrá convergencia en esta cuestión. En este caso, hablamos de dos diarios de tirada nacional, ambos con un fuerte arraigo social y dominación en el mundo mediático de su respectivo país. Además, como ha sido apuntado anteriormente, ambos medios comparten un mismo sesgo ideológico dentro de una misma región, por lo que es posible identificar muchos elementos geográficos y culturales compartidos por ambas poblaciones. Se trata, asimismo, de diarios conservadores que abordan toda clase de cuestiones de actualidad, por lo que cabría esperar que “los ciudadanos tengan a través de estos medios de comunicación “imágenes del mundo” similares mediante el proceso de jerarquización desarrollado por los periodistas de los dos sitios guiados por factores noticiosos análogos” (Giuliano, 2017).

Atendiendo a los resultados presentados por este estudio nos interesa destacar las siguientes consideraciones. Por un lado, en el caso de El Mercurio, vemos como a pesar de haber coincidencia en el primer tema de interés, noticias deportivas, existe divergencia entre el segundo y tercer tema de mayor interés. Mientras el medio posiciona en segundo y tercer lugar las cuestiones sobre política, seguidas de las noticias sobre ciencia, tecnología y educación, la audiencia prioriza las noticias que versan sobre espectáculos, seguidas de aquellas que versan sobre información general.

En el caso de Uruguay, observamos que no coincide ninguna rama de la información mediática en la lista por orden de interés del medio y de la audiencia.

Mientras El País prioriza los deportes, la política y los espectáculos, la audiencia pone mayor énfasis sobre las noticias sobre política, información general, seguidas por aquellas que abordan temas de ciencia, tecnología y educación. Por lo tanto, vemos que, dentro del orden de prioridades, coinciden las noticias sobre política en general. No obstante, resulta interesante hacer hincapié en que la audiencia prioriza el interés sobre asuntos de carácter público en mayor medida que el propio diario. Esto nos permite reafirmar la conciencia social imperante en la sociedad uruguaya, que muestra la posición preeminente que ocupan los asuntos generales en la opinión pública y en su agenda política correspondiente. En este caso, tiene sentido que, por lo tanto, no se dé una absoluta concordancia con respecto a los intereses resaltados por un medio de comunicación conservador y próximo ideológicamente al liberalismo económico, como es el caso de El País. (Giuliano, 2017)

Resulta especialmente interesante ver como en Uruguay sí se priorizan los asuntos públicos, a diferencia de lo que ocurre en Chile, dónde la audiencia parece estar más centrada en deportes, espectáculos o noticias de información general. Ello insta a pensar que en Uruguay hay una mayor concienciación hacia los asuntos públicos, lo cual se traslada a la agenda política predominante. Asimismo, esto último enlaza directamente con los porcentajes referidos anteriormente relativos al incremento de la inversión pública en determinados sectores públicos, considerado como prioritario por la sociedad uruguaya.

En contraste con el primer acercamiento acerca de la importancia de los medios de comunicación en las percepciones sociales, especialmente con respecto al potencial mediático de El Mercurio, la divergencia entre los intereses de los periodistas y los de las respectivas audiencias ponen en duda estas afirmaciones. En efecto, la brecha de intereses aludida invita a pensar que los medios de comunicación no cuentan actualmente con la capacidad de influir en la formación de la opinión pública de acuerdo con el marco de la teoría de la Fijación de la Agenda, desvirtuando el rol de nexo que pudiésemos pensar que desempeñan los medios de comunicación entre la política y la opinión pública. No obstante, hemos de diferenciar el hecho de que no exista absoluta concordancia en el orden de prioridades mediáticas con la capacidad de los medios de influir en el marco de pensamiento político de los chilenos y uruguayos. En efecto, a pesar de darse esta discordancia, teniendo en cuenta el curso de la trayectoria política de ambos países, en especial el caso chileno y la relación entre el régimen de Pinochet y El Mercurio,

resultaría equivocado desechar la idea de que el alcance que poseen estos dos diarios conservadores en sus respectivos países haya tenido impacto en la formación de la opinión pública, o al menos indirectamente en el marco de pensamiento político de gran parte de la sociedad.

Finalmente, y en relación con la cuestión desarrollada, otro de los indicadores que resulta asimismo revelador a la hora de valorar el grado en el que los ciudadanos manifiestan mayor predisposición a aceptar un papel más activo del Estado en el funcionamiento de la sociedad, se ve reflejado en el control del gobierno sobre los medios de comunicación. En efecto, el nivel de aquiescencia social con la capacidad del Estado para controlar los medios de comunicación nos permite entender el tipo de rol paternalista al que ciudadanos en diferentes contextos socio políticos están dispuestos a aceptar o incluso que necesitan demandar. En el contexto de América Latina y en relación con los países que centran este trabajo, encontramos los siguientes resultados ofrecidos por el Informe publicado por Latinobarómetro en 2020, los cuales pueden tener relevancia para nuestras consideraciones finales. En virtud de estos datos, mientras en el caso de Chile, apenas el 19% de la sociedad apoyaría la asunción de control por parte del presidente de los medios de comunicación en caso de dificultades, en el caso de Uruguay, la porción de la sociedad proclive a apoyar este control asciende a casi al 40% de los uruguayos encuestados (Latinobarómetro, 2020). El control y la gestión de la información se ha convertido en uno de los medios de poder más relevantes en la política actual. Asimismo, existen artículos que entienden que los medios de comunicación constituyen el cuarto poder dentro de la estructura de la división de poderes estatales y que, por lo tanto, representa un ente fundamental dentro del funcionamiento de cualquier (Galán-Gamero, 2014). Como hemos visto, de acuerdo con la teoría de la Fijación de la Agenda, la división de la agenda política y de la información transmitida a través de los medios de comunicación se encuentran separadas por una línea prácticamente imperceptible. De esta manera, parece que la actividad política y la transmisión de ideas se nutre eminentemente de los canales que ofrecen los referidos medios, así como su significativo alcance. El hecho de que una sociedad manifieste un alto grado de complicidad hacia una mayor concesión de poder de control de la información a los poderes estatales refuerza los cauces que dotan a estos últimos para acabar con la neutralidad ideológica necesaria en la transmisión de información veraz e imparcial. La aceptación social de este tipo de afirmaciones conlleva numerosas implicaciones en lo que la concepción social del Estado

respecta, ya que es a través de la información como, de acuerdo con la teoría de la Fijación de la Agenda, se crea al ciudadano. En consecuencia, el Estado gozaría de un poder que le permite incidir en la proyección de la realidad social mediante la transmisión ideológicamente contaminada de la información. No obstante, las respuestas nos las da la propia sociedad, quien es la que, a raíz de determinadas convicciones adquiridas a lo largo del tiempo y la experiencia, entiende que es el Estado el que ha de ser fuente de control de dicha información en aras de garantizar la seguridad y la protección de la sociedad ante situaciones de dificultad. Es aquí donde nos planteamos la pregunta respecto del tipo de Estado que una sociedad espera a fin de garantizar sus intereses. En lo que al tema principal de este estudio concierne, cabe apuntar que esta percepción paternalista del Estado, plasmada en su capacidad de control sobre los canales de transmisión de la información, se aparta del paradigma liberal relativo a la dimensión del Estado y su poder de intervención. En este sentido la capacidad de influencia de esta idea de Estado, que aflora a raíz de esta percepción social, es capaz de tener efectos directos sobre la esfera privada del ciudadano y, por extensión, en su libertad.

En consonancia con estos resultados, podríamos afirmar que se ven reflejadas dos concepciones especialmente contrastadas del Estado, al menos en lo que su capacidad de control sobre los medios de comunicación respecta. Asimismo, en ninguno de los dos casos sería disparatado tener en cuenta las implicaciones del duro y traumático legado dejado por los regímenes autoritarios, especialmente el de Pinochet en Chile. En este sentido y a la luz de los datos expuestos, podríamos también interpretar que dichas experiencias dictatoriales podrían haber conducido a una mayor apreciación social de la independencia política en relación con la libertad de expresión, para cuya articulación los medios de comunicación constituyen un canal imprescindible. Con independencia de estas interpretaciones dispares de lo que el pasado dictatorial de un país ha podido infligir en una sociedad, resulta evidente que los resultados en uno y otro país revelan concepciones distintas de la figura del Estado, en virtud de la cual podemos, de nuevo, atisbar las diferentes tendencias socioculturales hacia una mayor o menor tendencia hacia el pensamiento liberal.

## CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN FINAL

Como ya apuntamos al principio de este trabajo, la cuestión relativa a la comprensión de la opinión pública requiere un rigor analítico de datos muy complejo. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, existen determinados resultados obtenidos por encuestas que inducen a la confusión y que no dejan claro hasta qué punto el conjunto de percepciones sociales se puede considerar consistente o no con el paradigma liberal económico.

Por un lado, conviene tener en cuenta que, a pesar del alcance que presentan las encuestas, éstas se encuentran constreñidas en lo que al liberalismo económico concierne. En efecto, encontramos como se pueden inferir las percepciones sociales mayoritarias hacia el liberalismo económico cuando las encuestas dan cuenta de la opinión pública sobre el modelo de libre mercado, el rol del Estado o la confianza en las instituciones, pero éstas carecen de enfoques que ahonden más en el pensamiento económico. Es decir, al encuestado sólo se le plantean cuestiones muy genéricas, sin, por lo tanto, entrar en políticas concretas que se entenderían como liberales en términos económicos, como puede ser, a título de ejemplo, la flexibilización de la legislación laboral. Por otro lado, vemos como, a pesar de que existan pautas que hacen que la opinión pública se sostenga en el tiempo, ésta no es impermeable a las circunstancias políticas de los respectivos países, por lo que es muy complejo determinar patrones que configuren un marco de pensamiento estático. Esto no quiere decir, que la opinión pública sea volátil, pero sí que, en ocasiones, ésta se ve sustancialmente influida por las diferentes coyunturas que atreviese el país o la persona en cuestión. De esta manera, la opinión pública se forma en base a fundamentos de carácter más pragmático, adaptándose ésta a las necesidades y circunstancias nacionales o personales del momento.

Una vez expuesto el contexto político en la historia más reciente de ambos países, hemos encontrado diversos resultados. Éstos en muchas ocasiones generan dudas y hacen difícil extraer conclusiones precisas que nos permitan determinar con total claridad la opinión preponderante de la sociedad de estos dos países hacia el liberalismo económico. En términos generales, podemos decir que la trayectoria chilena durante los últimos años es tendente a hacernos pensar que el país y con él, la sociedad chilena, ha crecido de la mano de un modelo de mercado liberal, cuyas raíces se han visto fuertemente arraigadas, tanto en las instituciones como en los medios de comunicación más influyentes. De esta manera, podríamos pensar que dicha trayectoria, junto con la experiencia vivida con

anterioridad al golpe de Estado, han fomentado la consolidación del pensamiento liberal en términos económicos en muchos niveles de la sociedad chilena. No obstante, esta conjetura ha de ser tratada con mucha cautela hoy en día. En efecto, esta lectura con respecto a la opinión pública mayoritaria en Chile parece dejar de sostenerse a raíz de las revueltas acontecidas en 2019, momento clave a partir del cual se articula un descontento social masivo hacia el sistema. De nuevo, los datos ofrecidos por Latinobarómetro, nos indican como hay un descontento social generalizado hacia las instituciones. En línea con esta afirmación, podemos observar cómo hay una desconfianza muy alta de los chilenos tanto hacia el Gobierno como el presidente, ambos escasamente respaldados por un 18% de los chilenos encuestados en términos de confianza hacia estas dos instituciones (Latinobarómetro, 2020). Asimismo, la aprobación de la nueva Constitución constituye una directa manifestación contraria hacia las bases del modelo de mercado, consagrado en la Constitución aprobada en 1980 durante el régimen de Pinochet. Por ello, el análisis realizado sobre la opinión pública chilena ha de ser contemplada con cuidado, dado que actualmente está experimentando un cambio sustancial que podría cambiar la lectura de la opinión pública en la cuestión que nos atañe.

Por otro lado, el caso de Uruguay parece indicarnos una menor proclividad hacia las ideas que fundamentan el pensamiento liberal en términos económicos. Es un supuesto que podríamos tildar como “híbrido”, ya que es un país que ha preservado ciertas instituciones de carácter liberal, como las denominadas “Zonas francas”, quedando de esta manera resquicios del legado del régimen autoritario, así como de las corrientes conservadoras del país. No obstante, a la luz de los resultados expuestos resulta bastante claro que en Uruguay predomina una percepción estatista muy arraigada, a raíz de la cual se presta mucha importancia en el papel del Estado como garante de muchos servicios públicos esenciales. Por estas razones, podemos decir que, a pesar de presentar una trayectoria política, así como una clase de élites y de medios de comunicación preponderante, similar a la chilena, hay un consenso social muy extendido que aboga por un sistema en el que se priorice la cobertura de políticas públicas. Sin embargo, en el caso de Uruguay, también hemos de estar al tanto de la situación electoral actual. El presidente uruguayo electo en 2020, Luis Lacalle Pou, perteneciente al Partido Nacional de Uruguay, es un político que podría tildarse de conservador y, por extensión, próximo al liberalismo económico, por lo que podríamos estar contemplando cierto viraje electoral en el país, que a su vez entrañe cambios en la opinión pública, al igual que ocurre con la situación

actual en Chile. Esto nos sirve para entender que las percepciones sociales hacia el liberalismo económico no son necesariamente estáticas y que pueden cambiar en función de las circunstancias del momento, sin perjuicio de que hayamos podido determinar las tendencias mayoritarias que han predominado en Chile y Uruguay durante muchos años, así como las razones que pueden ayudarnos a entenderlas mejor.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alcántara, M., & Luna, J. (2004). Ideología y competencia partidaria en dos post-transiciones: Chile y Uruguay en perspectiva comparada. *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 24(1), 128-168.
- Barría, C. (25 de Noviembre de 2019). Desigualdad en América Latina: los países en los que más ha disminuido (y la paradoja del que más la ha reducido). *BBC News*.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2010). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
- Bertino, M., & García Repetto, U. (2008). La expansión del funcionariado público en el Uruguay del siglo XX. *Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Universidad de la República (Uruguay)*, 26-45.
- Buquet, D., & Piñeiro, R. (2011). La Consolidación de un Nuevo Sistema de Partidos en Uruguay. *Revista Debates vol.8*.
- Cohen, B. C. (1963). *The Press and Foreign Policy*. Princeton University Press.
- Corral, M. (2009). To what extent should government ensure citizen well-being? *Vanderbilt University*, 1-5.
- Couso, J. (2011). El mercado como obstáculo a la libertad de expresión: La concentración de la prensa escrita en Chile en la era democrática. *Plataforma Democrática*, 1-18.
- Cruz, J. M. (1996). El papel de la prensa y la opinión pública. *Estudios Centroamericanos*.
- Dermota, K. (2002). *Chile Inédito. El periodismo bajo democracia*. Santiago: Ediciones B.
- Dittus, R. (2005). La opinión pública y los imaginarios sociales: hacia una redefinición de la espacial del silencio. *Athenea Digital Núm. 7*, 61-76.
- Ferre, Z., Melgar, N., & Rossi, M. (2008). Rol del Gobierno: ¿Qué opinan los uruguayos? *. Departamento de Economía, Universidad de la República*, 1-44.



- Focás, B., & Kessler, G. (2015). Inseguridad y opinión pública: debates y líneas de investigación sobre el impacto de los medios. *Revista mexicana de opinión pública* (19), 41-58.
- Galán-Gamero, J. (2014). Cuando el ‘cuarto poder’ se constituye en cuarto poder. *Palabra Clave* 17, 152-187.
- Giuliano, C. (2017). El “mundo” para los periodistas y las audiencias de medios online en Argentina, Chile y Uruguay. *Repositorio Digital San Andrés*, 1-149.
- González, A., Iannolo, M., & Lissignoli, J. (2012). Determinantes del apoyo de los individuos al liberalismo económico. *Universidad de la República (Uruguay)*.
- Gutiérrez, L. (2019). Neoliberalismo y Modernización del Estado de Chile: Emergencia del gobierno electrónico y desigualdad social. *Cultura-hombre-sociedad*, 259-280.
- Heritage Foundation (Washington D.C.). (2022). *The Index of Economic Freedom*.
- Lanzaro, J. (2013). Continuidad y cambios en una vieja democracia de partidos: Uruguay (1910-2010). *Instituto de Ciencia Política*.
- Latinobarómetro (2020). *Latinobarómetro (2020)*: banco de datos.
- Lippmann, W. (1993). *The Phantom Public*. London: Transaction Publishers.
- Livacic, G. P. (2018). Análisis de la teoría burocrática del Estado burocrático autoritario: de la comparación de los casos de Brasil y Chile en el debate de la posibilidad de un lugar común de desarrollo. *Revista de Estudios Políticos y Estratégicos*, 1-22.
- McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly* 36.
- Menanteau-Horta, D. (2017). El rol del Estado en el desarrollo social y la Reforma de la previsión en Chile y EE.UU. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 5-22.
- Mönckeberg, M. (2011). *Los magnates de la prensa: Concentracion de los medios de Comunicacion en Chile*. Santiago: Debate.
- Mundial, B. (2022). *Índice de Gini*. Banco Mundial.

- Navia, P., Osorio, R., & Valenzuela, F. (2013). Sesgo político en las lunas de miel. En A. Arriagada, & P. Navia, *Intermedios: Medios de comunicación y democracia en Chile* (págs. 36-55). Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Ochman, M. (2014). Políticas sociales focalizadas y el dilema de la justicia. *Andamios*, 147-169.
- Raczynski, D. (1995). Focalización de Programas sociales: Lecciones de la experiencia chilena. *Políticas económicas y sociales en el Chile democrático*, 217-255.
- Rivas, M. J. (2003). Socialización política y participación ciudadana. Jóvenes en dictadura y jóvenes en democracia. *Revista de Estudios de Juventud*, 57-76.
- Roiz, M. (1987). La opinión pública: Teorías, concepto y métodos. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 218-221.
- Rojas, M., & Charles-Leija, H. (2022). Chile, milagro de crecimiento económico, pero... ¿y el bienestar? *Perfiles Latinoamericanos*, 1-28.
- Rubio, J. M. (2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. *Gazeta de Antropología*.
- Salas, G., Santander, P., & Precht, A. (2020). COVID-19: impacto psicosocial en la escuela en Chile. Desigualdades y desafíos para Latinoamérica. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 1-17.
- Sanjuán, C. R. (2016). La (des)regulación política de la economía de mercado: Del liberalismo económico al neoliberalismo. *Política Común*, 2-10.
- Selligson, M. (2008). The role of the government in job creation. *Vanderbilt University*, 1-5.
- Sopena, J. (2008). El fenómeno de la opinión pública: líneas de investigación en Europa. *Revista Universitària de Treballs Acadèmics*, 1-20.
- Soto, Á. (2003). *El Mercurio y la difusión del pensamiento político. Económico-liberal. (1955-1970)*. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario.
- Stormansan, J. Y. (2011). Los años del capitalismo renovado: La influencia de Milton Friedman en Chile. *Revista de Estudios Sociales*, 50-62.

Valenzuela, J. S. (1995). The origins and transformations of the Chilean party system. *Estudios Públicos* 58, 2-66.

Zaller, J. R. (2014 V. O 1992). *La naturaleza y los orígenes de la opinión pública*. Madrid: CIS.